

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 1º Juzgado Civil de Valdivia
CAUSA ROL : C-2145-2021
CARATULADO : GALLARDO/FISCO DE CHILE/

Valdivia, a diez de Enero del año dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Al folio 1, Francisco Javier Amigo Cartagena, abogado en representación de **Gerardo Ariel Gallardo Cortés**, Empleado, Número de Registro Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura N° 9.302; **Inés Del Carmen Soliz Milanca**, Empleada; **Doris Yanett Gallardo Moncada**, Empleada, y **Laura Andrea Gallardo Soliz**, Empleada, todos con domicilio para estos efectos en Calle Tucapel N°564, Oficina N° 67, Concepción, deducen demanda civil de indemnización de perjuicios en juicio de hacienda en contra del **Fisco de Chile**, persona jurídica de Derecho Público, representado por don Natalio Vodanovic Schnacke, abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Valdivia, ambos con domicilio en calle Independencia N°630 oficina 311 de la comuna de Valdivia, en virtud de los antecedentes de hecho y de derecho que exponen:

Hechos:

A. Relato del demandante principal, don Gerardo Ariel Gallardo Cortés

1. En el año 1973 cursaba segundo medio de Enseñanza Media y tenía solo 16 años de edad, Vuestra Señoría. Era yo un joven simpatizante del MAPU Obrero Campesino y dirigente estudiantil en el Liceo de la comuna Río Bueno, provincia de Ranco, región de Los Ríos. Mi ciclo de detenciones comenzó el 17 de septiembre de 1973, siendo aún menor de edad.

Aquel día, alrededor de las 12 del día, fui detenido en una calle cercana a mi liceo, en plena vía pública. Saliendo de clases, carabineros y militares me aprehendieron sin juicio previo. Me agarraron por la espalda y me retuvieron a golpes -principalmente en el estómago- para dejarme débil y así no escabullirme. Me pusieron las esposas y me tiraron a un vehículo para llevarme a la Comisaría de Río Bueno.

2. En aquel lugar alcancé a estar solo estuve 1 día, lapso en el cual no me dejaron comunicarme con mi familia ni pedir ayuda. Me encerraron en un



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PBWFXLKJMXC

cuarto pequeño todo el día para interrogarme sobre cuestiones de la dictadura: si es que conocía gente que estaba en su contra, si es que escondían armas y qué es lo que planeaban. Yo carecía de esa información pues solo era un adolescente. Ninguna de mis respuestas les satisfacía, por lo que me azotaban contra las paredes en medio de insultos y me tiraban al suelo para golpearme repetidamente en el estómago, a causa de tanta fuerza aplicada, vomitaba con frecuencia. Posteriormente esos animales me dejaron allí tirado en medio de mi propio vómito, sin moverme a causa de los lumazos que me pegaron en la espalda. Estuve en un charco húmedo durante horas y entre lágrimas, gritaba por auxilio.

3. Al otro día me soltaron y tuve que ir caminando a mi casa. Por todo el camino cojeaba, iba sediento y con la cara hinchada. Recuerdo que ese día estaba completamente soleado y el ambiente estaba seco porque me costó mucho trabajo respirar a causa de los tapones de sangre que se me formaron en el tabique producto de los golpes que recibí en la cara y que me dieron en la nariz; esos fueron los más dolorosos. Al llegar a casa no comenté nada con mis padres, ya que no quería preocuparlos. Provengo de una familia humilde llena de problemas y uno más hacia aquella fecha -sobre todo de este calibre- los hubiese preocupado demasiado. Pensé que no hacía mal en no contarles, solo les dije que me había metido en una pelea con unos matones, porque suponía que solo me habían detenido esa vez y que ya me iban a dejar en paz.

Con todo, me equivocaba al pensar aquello.

4. Me volvieron a detener el 21 de septiembre de 1973 hasta el 23 de septiembre de 1973. También desde el 30 de septiembre hasta el 2 de octubre y desde el 10 de octubre al 12 de octubre del mismo año. En todas las ocasiones me llevaron a la Comisaría de Río Bueno. Estos fueron intervalos de detenciones a manos de carabineros y militares por tres días cada vez. Me mantuvieron incomunicado en todas las ocasiones, y era salvajemente torturado. Mis padres aún no tenían ni idea, como éramos de escasos recursos, su mayor preocupación era llevar el pan a la mesa y luchaban cada día por eso, por lo que no necesitaban saber que su hijo era perseguido y acosado por agentes del Estado. Asimismo, no podía pedir



ayuda de ningún tipo a un organismo externo, ni siquiera un abogado. Además, era joven y pobre, carecía de información y medios.

5. A parte de mantenerme incomunicado, también fui siempre salvajemente torturado. A pesar de no oponer resistencia y a pesar de que me mantuvieron con las muñecas amarradas en todas las detenciones, me batían a golpes y a patadas. Me golpeaban en el estómago y la espalda, sobre todo en la cara y en la nariz. Quedaba con el cuerpo entumecido y a causa de la adrenalina, casi siempre me terminaba desmayando. También me golpeaban con la culata del fusil, sobre todo en la espalda y la nuca, lo cual me dejó secuelas graves a causa de las diversas contusiones y conmociones de las que fui víctima producto de la violencia de militares y carabineros. No solo era violencia, sino que también había salvajismo y humillación: eran sádicos. En mi cuarta detención me llevaron amarrado con un alambre de púas oxidado a la Comisaría. Recuerdo que quedé con toda la ropa rasgada y con heridas infectadas. Me dejaron encerrado, sediento y con el cuerpo lleno de secreciones. También me quemaron. Muchas veces calentaban tenazas al fuego y las usaban para marcar mi cuerpo. El dolor era insoportable y recuerdo que me humillaban por gritar tanto.

Parecía que estos animales disfrutaban con el sufrimiento de un adolescente, pues se reían mucho mientras me hacían sufrir.

6. Mi quinta detención ocurrió el 19 de octubre de 1973. Fue esta detención la más larga: estuve aproximadamente 1 año y 1 mes, vale decir, hasta el 15 de noviembre de 1974, y producto de esta interminable reclusión creo me volví loco, experimentando la historia más triste de mi vida.

En esta oportunidad era nuevamente esta vez era detenido cerca de mi lugar de estudios, específicamente frente a él. Esta vez estuve en cinco centros de detención: en la comisaría de Río Bueno, en el edificio SIM Valdivia, en el Gimnasio Población Perú, en la cárcel de Valdivia y en la cárcel de Río Bueno. En todos los centros de reclusión me mantuvieron incomunicado, sin informar a mis cercanos sobre mi paradero y también fui torturado. En toda esta pesadilla, narraré a Vuestra Señoría que experimenté todos los abusos imaginables que puede sufrir un ser humano a



manos de torturadores carecientes de alma y poseedores de un total desprecio por la vida humana. También presencié fusilamientos, y puedo dar fe que no existió mujer detenida que no fuese violada.

7. En el campo de reclusión de Valdivia, los militares nos levantaban casi todas las noches para interrogarnos lanzándonos en nuestro cuerpo el contenido de un balde con agua servida; esto y más el trauma por el que estábamos pasando, provocaba que no tuviésemos un sueño reponedor y una mente descansada. Nosotros sabíamos que esos interrogatorios no eran más que una excusa para seguir torturándonos. Nos colocaban nódulos de electricidad en diversas partes del cuerpo, generalmente en los testículos y en la sien. A veces el voltaje que descargaban sobre mí era muy alto (era 220 voltios, sin lugar a dudas), causando que mi esfínter se soltara y me orinara encima. Ellos me dejaban así, con la orina encima, amarrado y magullado. Cuando no me desmayaba, era consciente de que mi cuerpo se contorneaba por el dolor y de cómo mi propia mente hacía corto circuito. Este método me fue aplicado en 3 oportunidades, y sus recuerdos han estado presente en todas las crisis depresivas que durante mi vida he tenido recordando a causa de las torturas sufridas.

8. La mayoría de las veces durante mi infierno me mantuvieron aislado, sin ningún tipo de contacto humano. Ahora que lo pienso, allí fue donde comencé a perderme, porque cuando estaba solo, era mucho más consciente de mi situación. Además, me privaron de alimento y agua suficientes; también me negaban ir al baño con frecuencia, por lo que tuve que hacer mis necesidades en ese mismo cuartucho.

Durante las noches perdía mi vista: con frecuencia, contaba las moscas que volaban por encima mío para intentar olvidarme del encierro. A veces miraba mi cuerpo y no lo reconocía: estaba completamente magullado y marcado por las quemaduras y la electricidad, tenía moretones por todas partes y también heridas infectadas. El aislamiento hizo que me perdiera en mi propia mente y aumentó mi sensación de desesperanza.

Incluso llegué a pensar que ya no era un ser humano, pues los agentes del Estado me quitaron todo: incluso mi dignidad más sagrada.

Entre el hambre y el dolor, Vuestra Señoría, uno se cuestiona si realmente vive.



9. Cuando salí en libertad pasé algunos días loco, pues era irreconocible para mi familia. Tenía la mirada perdida según me lo comentaban aquellos meses después de recuperar -quizás- la plena estabilidad mental: por su parte, al inicio de la etapa estudiantil la rectora del liceo me negaba la matrícula, por lo que no pude seguir estudiando. Mi familia carecía de recursos y de poder para mandarme a otro lado donde no me conocieran y así poder seguir estudiando.

No finalicé mi etapa escolar.

Finalmente, no pude seguir con mi vida normalmente, porque cada vez que me veían por la calle durante las semanas siguientes, Carabineros de Río Bueno me detenían y me llevaban al cuartel o a la comisaría, donde me tenían horas retenido sin ninguna razón.

10. Con todo lo vivido señor Juez no solo perdí mis estudios, sino que también perdí mi vida y afecté negativamente la de otros. Me costó mucho encontrar trabajo, causando que no le pudiese dar comodidades o una buena vida a mi familia producto de mi situación política. Asimismo, mi depresión les afectó enormemente, porque no pude ser un padre presente y activo. No les pude entregar lo que necesitaban. Tampoco puedo hoy. La depresión jamás me ha dejado, solo se ha condensado en mi interior y hay días en los que solo quiero encerrarme en mi pieza y no hablar. Me asusto cuando alguien menciona el Golpe, cuando veo militares y carabineros es mi peor pesadilla. Sufrí la amputación de dos dedos del pie izquierdo y sufrí también una amputación de la pierda derecha por debajo de la rodilla, además de otras diversas secuelas físicas y psicológicas, como lesiones lumbares, alteraciones nerviosas, úlceras en la planta del pie que me tienen actualmente en silla de ruedas, dependencia a la insulina, quemaduras, pánico, estrés y muchísimo miedo. Jamás en mi vida volví a acercarme a un enchufe, y a nada que genere electricidad.

B. Relato de la cónyuge del demandante principal, doña Inés Del Carmen Soliz Milanca.

11. En mis años de convivencia y matrimonio con Gerardo aprendí cómo un ser humano puede estar marcado para siempre a causa del daño infringido por otros. Como esposa, no pude hacer mucho para aliviar ese dolor, me esforcé por intentar sacarlo de ese hoyo, por comprenderlo, pero



nunca pude tener éxito. Siempre le hice saber que yo estaba ahí para él, pero él jamás hablaba de lo sucedido y había días en los que no emitía ni una sola palabra acerca de nada.

El cúmulo de sus tristezas precarizó nuestra relación al punto de llegar a cortar nuestro vínculo verbalmente el año 1989, intentando en diversas ocasiones retomar nuestra relación más sin éxito, divorciándonos finalmente el año 2018 (estuvimos casados desde 1983), destruyéndose así una familia a causa de estos malditos y de que mi ex marido jamás volvió a ser el mismo después de lo vivido. Jamás.

12. Sabía que su experiencia con la dictadura empezó desde que él era solo un niño de 16 años. Sé de algunos acontecimientos como las quemaduras y las aplicaciones de corriente que vivió en ese infierno. Me relató aquello porque yo veía las marcas en su cuerpo y era testigo de las secuelas que dejó la electricidad en su sistema nervioso; eran evidentes y no le quedaba más remedio que contarme. A menudo le dolía la espalda a causa de una lesión lumbar provocada por las torturas y no soportaba estar acostado mucho tiempo. También, relacionado a eso, tuvo que ser operado de la cadera porque tiene un problema estructural grave en todo el sector de la columna. Con el paso de los años fui armando un rompecabezas sobre toda su experiencia; a veces, cuando se daba cuenta de mi angustia por ayudarlo y por tratar de entenderlo, me contaba algunas de las torturas que sufrió. Lo que más me duele, es que sé que no me ha contado las peores.

Una gran parte de mi vida desperté durante las noches, cuando Gerardo se despertaba gritando y a veces llorando. Yo lo abrazaba y lloraba con él, pues su llanto era también mío.

13. Durante toda la vida que tuvimos en común Gerardo sufrió de crisis de pánico cuando veía militares y carabineros. Le invade un miedo tremendo cuando alguien habla de la dictadura y no puede caminar tranquilo por la calle porque tiene la sensación de que en cualquier momento lo van a detener. Casi siempre prefiere encerrarse en la pieza y no hablar con nadie: a medida que pasaban los años se va alejando cada vez más y se va perdiendo en sí mismo. No olvida lo que le hicieron y su propio cuerpo no se lo permite. Quedó completamente quebrado. Y es que esos años afectaron su vida completa y la nuestra como familia.



14. Nuestra vida fue de muchas carencias porque él no pudo terminar sus estudios ni conseguir un buen trabajo a causa de su situación política. No lo admitían en ningún puesto. Día tras día salía a buscar trabajo y volvía con las manos vacías. Como es de esperar, la situación familiar cada vez se volvía más tensa. Yo como madre, me desesperaba por mis hijos y por el bienestar del hogar y arremetía contra él, causándole más daño, pero él no tenía la culpa. Era la víctima de toda la situación. Lo más probable es que esto le afectara más a él de lo que me afectaba a mí.

15. Como la situación no se arreglaba con el transcurso del tiempo llegamos a pertenecer a una olla común y vivíamos en campamentos. La situación era precaria monetaria y sentimentalmente. Las constantes crisis depresivas de Gerardo provocaron que el núcleo familiar tuviese muchas carencias emocionales, pues la falta de comunicación de su parte dejaba muchas respuestas inconclusas y desde ahí se abría paso hacia la especulación y los malos entendidos. Pasamos mucha hambre y mis hijos se limitaron a muchas cosas. Ellos sufrieron las consecuencias de la situación política. No tenían estabilidad y nuestro hogar no fue construido en paz.

C. Relato de la hija del demandante principal, doña Doris Yanett Gallardo Moncada.

16. Desde que tengo uso de razón es que he vivido con un padre depresivo. Sé que aquello no es a causa de algo genético, Vuestra Señoría. A mi padre lo destruyó el mismo Estado de Chile, durante la Dictadura Militar. Sus crisis traían aparejadas nefastas consecuencias para nuestro grupo familiar, desde que tengo uso de razón. Enclaustramientos, insomnio y gritos de mi padre durante las noches fueron pan de cada día durante mi infancia.

17. A medida que pasaban los años fui pudiendo ponderar en base a mi madurez que mi padre no era un tipo normal, como el resto de los padres. No es normal, Vuestra Señoría, que un hombre tirite de terror al ver un Carabinero pedirle su licencia de conducir. No era normal que un padre viviese temeroso durante mi tierna infancia, obligándonos a estar encerradas en nuestro domicilio a mayor parte del día por un temor excesivo a que “algo nos sucediese”.

No es normal que un padre no pudiese enchufar una tostadora o un televisor y queuviésemos que ayudarlo en ello.



18. Actualmente Vuestra Señoría mi padre vive conmigo, y no habla absolutamente nada. Lo acompaño en sus tardes de tristeza donde recuerda a menudo el infierno que vivió en su tierna juventud.

Hace unos meses me dijo que no habla porque no tiene nada que hablar: que “su vida fue una mierda”, y con frecuencia llora. En sus ratos de profunda tristeza, me dice que le hubiese gustado haber sido un profesional. Actualmente él sufre de diabetes, y le han imputado 2 dedos de sus pies.

Y yo crecí y viví preguntándome porque él vivió todo ese infierno, y por qué no tuve un padre normal, y por qué la ausencia de cariño de él generó una inestabilidad emocional mía para con mis pares y sentimentalmente; quizás la carencia de una sana empatía, sentimientos de frustración y una evidente falta de flexibilidad ante nuevas situaciones que la vida me fue proponiendo.

D. Relato de la hija del demandante principal, doña Laura Andrea Gallardo Soliz.

19. Tuve una infancia muy desgraciada señor Juez. Él siempre tuvo problemas para encontrar trabajo, por el daño psicológico que le dejó las torturas que sufrió durante el régimen militar. Él estuvo más de un año detenido, donde sufrió torturas que lo convirtieron en un padre depresivo y emocionalmente destruido.

20. Mi infancia estuvo marcada de ausencias; ausencias económicas, educativas y emocionales. Mi padre nunca fue un padre normal, Vuestra Señoría.

Dicen que la ausencia de emociones y afecto paternal ocasionó en mí un constante estado ansioso, fundado en una permanente sensación de abandono afectivo, baja tolerancia al estrés, y una inestabilidad en la construcción de las relaciones sociales para con los otros. Dicho diagnóstico me fue señalado durante mi vida por diversos especialistas.

Hoy cuando deseo visitarlo sé por medio de mi hermana que no desea recibir a nadie: ella me comenta que pasa el día encerrado, que apenas camina, y que desde hace algún tiempo decidió no hablar enclaustrándose en sí mismo.

¿Y así irá a morir mi padre, sin siquiera hablar?

Derecho:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PBWFXLKJMXC

I. Delitos Contra la Humanidad. Breve Contexto Histórico

1. Los inicios de las problemáticas de la persecución de la responsabilidad emanada de los crímenes de lesa humanidad los encontramos con posterioridad a la I Guerra Mundial, donde surgieron los primitivos intentos de establecer una jurisdicción penal internacional, paralelos a la incorporación de la responsabilidad penal de los individuos en el orden internacional.

Más tarde, en el marco de la Sociedad de las Naciones, se aprobó la Convención para la represión del terrorismo, de 16 de noviembre de 1937, en la que se preveía la creación de una corte penal internacional, que, sin embargo, no llegó a entrar en vigor. Asimismo, con los tribunales de Nuremberg y Tokio se comienza a gestar un Derecho Penal Internacional (DPI), mediante el cual se dota de operatividad el repudio a los crímenes contra la humanidad. Sin embargo, “el paso cardinal se produjo a raíz de la guerra en los Balcanes y en la región de África Central, en Ruanda y Burundi, durante los primeros años de la década de los 90. Estos conflictos condujeron a la creación de dos tribunales internacionales penales ad hoc, para juzgar las graves violaciones a los DD.HH. y al DIH producidas durante los mismos”.

Todo ello, ha dado lugar al establecimiento de la Corte Penal Internacional (CPI), contenida en el Estatuto de Roma de 1998, que al 21 de julio de 2009 cuenta con 110 Estados partes. El Estado chileno depositó el instrumento de ratificación el día 29 de junio de 2009.

En América Latina, en la década de los setenta y ochenta (Perú, Argentina y América Central, en el caso peruano incluso hasta los primeros años de los noventa), se cometieron violaciones masivas de DD.HH, donde Chile vivió un régimen autoritario que llevó a cabo su política represiva, conculcando los derechos de los contrarios al régimen. A raíz de eso es que “en 1975, la Comisión de DD.HH. de las Naciones Unidas creó un Grupo de Trabajo Ad Hoc para investigar la situación de los derechos humanos en Chile⁸”. Dicho Grupo visitó Chile solo en julio de 1978 y señaló que era preciso establecer una comisión independiente bajo la legislación chilena, para investigar el destino de las víctimas desaparecidas, juzgar a los responsables y otorgar la correspondiente reparación, pero “la propuesta fue



rechazada por el gobierno chileno al afirmar que el poder judicial constituía la única autoridad competente en Chile para investigar los delitos penales y que por lo tanto los investigadores extranjeros violarían la soberanía chilena”. Con tal negativa, el Grupo fue disuelto y Naciones Unidas designó a un experto para que estudiara la cuestión de las personas desaparecidas en Chile, informe que entregó a la Asamblea General en 1979 y otro a la C. de DD.HH. en 1980, en ellos señaló que “si no se identifica y castiga a los responsables, podría ocurrir que hubiese quienes viesan las desapariciones como un método operativo aceptable para administrar la seguridad nacional en el futuro”.

El gobierno militar en el año 1978 había dictado el DL 2.191 de Amnistía para los responsables de los actos comprendidos entre los años 1973 y 1978, lo que impidió dilucidar el paradero de cientos de detenidos desaparecidos. Con el retorno a la democracia se investigaron las desapariciones forzadas, dando lugar a que “en 1991 se hiciera público el informe de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación en que se atribuye al Gobierno militar la muerte de más de dos mil personas así como la tortura de varias miles más”. En este escenario las víctimas demandaron la debida sanción penal para los culpables y la consiguiente reparación pecuniaria por parte del Estado.

Se aprecia que los tribunales en esta materia han ido evolucionando, pues en un principio se aplicaba el DL de Amnistía, lo que cambió con la fuerte arremetida de los DD.HH, acogiéndose en sentencias principios de Derecho Internacional, convencional y consuetudinario.

2. Por decreto 1.040 del 26 de Septiembre de 2003, el presidente Ricardo Lagos dispuso la creación de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que tendría la calidad de órgano asesor del mandatario. El objeto era suplir las carencias de la Comisión Rettig, que sólo pudo pronunciarse sobre quienes habían muerto a manos de agentes del Estado durante la Dictadura Militar. Las torturas y prisiones no habían sido contempladas con anterioridad.

II. Del Fundamento Normativo de la Responsabilidad Estatal

a. La Teoría de la Responsabilidad de Derecho público (o Constitucional del Estado), pretende por sobre todo dejar sin efecto la impunidad para los



actos del Estado que lesionan los derechos fundamentales de las personas. Siendo el Estado una persona de Derecho Público que debe desenvolverse en un régimen republicano, donde no se reconocen privilegios y se ha de actuar con estricto apego a la juridicidad, la responsabilidad que le afecte no puede buscarse en normas civiles que se refieren a simples delitos civiles, sino en las normas que regulan la conformación y actuación de los poderes públicos: esto es, la Constitución. Lo anterior resulta evidente, pues nuestro Código Civil chileno no fue creado para regular delitos considerados de lesa humanidad, regulados por normas superiores a la legislación interna de cada Estado.

2. Las normas constitucionales que determinan este régimen público de responsabilidad del Estado son principalmente los arts. 6 inc 3º, 7 inc.3º y 38 inc. 2º de la Constitución Política del Estado: Artículo 6º: Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley;

Artículo 7º: Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale;

Artículo 38: Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes. Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus



organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño.

3. Como se observa, los dos primeros de estos preceptos (en negrita) declaran que los actos del Estado que infrinjan la juridicidad generan entonces responsabilidad; por su parte, el tercer precepto indicado reconoce el derecho del particular afectado por una lesión a sus derechos por parte de la Administración de reclamar a los tribunales de justicia, sin perjuicio de la responsabilidad personal del funcionario que causa el daño. Se trata, por tanto, de una responsabilidad constitucional que se imputa directamente al Estado y no a través de un tercero dependiente.

4. Téngase presente por Vuestra Señoría que nuestra Constitución Política en su artículo 1 inciso 4º señala lo siguiente: “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece” Que además, la responsabilidad del estado en materia de lesa humanidad guarda expreso fundamento, como se observa en el artículo 5 inciso 2º de nuestra Carta Fundamental: Artículo 5º: La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 5. De esta forma, es el Estado quien se construye como un garante de respeto de los derechos y garantías establecidas a favor de la persona humana, desde el nacimiento de ésta hasta su muerte. En efecto, todo el numerando consagrado en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado se construye sobre el mismo fin; asegurar a todas las personas garantías que el Estado chileno considera como esenciales (como la de su



integridad física y síquica -art. 19 N° 1-, o el debido proceso -art. 19 N° 3-, en todos sus incisos). 6. En concordancia con lo ya señalado respetuosamente a Vuestra Señoría, el art. 4 de la Ley 18.575, denominada “Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado” señala lo siguiente: “El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”.

III. De la Responsabilidad Constitucional del Estado por Crímenes en Contra de la Humanidad. Imprescriptibilidad

7. Como ya hemos expuesto, sostenemos entonces con suficientes fundamentos -ya expuestos y considerados por nuestra Doctrina y Jurisprudencia- que la responsabilidad del Estado en estas materias es una responsabilidad constitucional, y no contractual o extracontractual, como ha sostenido por cierta doctrina. Los fundamentos de aquello –como se dijo- se encuentran en los preceptos de nuestra propia Constitución, en la naturaleza del hecho generador del daño y en la existencia de un marco internacional que lo regula expresamente. Por su parte, la responsabilidad del estado en materia de crímenes de lesa humanidad (por tratarse de delitos que han sido cometidos sistemáticamente y violándose en su comisión derechos tan esenciales -como lo son los derechos humanos de la persona-) ha sido considerados como imprescriptibles por nuestros Tribunales Superiores de Justicia. Los argumentos que justifican dicha imprescriptibilidad según la Doctrina, son, entre otros, los siguientes: a. Existencia de estatutos diferentes regulatorios de distinta naturaleza.

Nuestro Código Civil chileno –que regula la prescripción civil- fue construido para regular las relaciones de responsabilidad entre los particulares entre sí, y de éstos respecto del Estado, pero no para regular la responsabilidad internacional del Estado que se origina con la comisión de delitos en contra de la humanidad. b. Existencia de un Principio de Derecho Internacional Especial. El art. 29 del estatuto de la Corte Penal Internacional dispone lo siguiente: “Los crímenes de la competencia de la Corte (de lesa humanidad) no prescribirán”. Como se observa, la norma no distingue entre las acciones civiles y penales, siendo entonces ambas



imprescriptibles¹⁴. c. Seguridad Jurídica y la Falsedad de su Argumento en el caso sub lite. En este punto, reproducimos lo señalado por CAMPOS: ¿la seguridad y certeza jurídica, fundamentos de la prescripción, son para las víctimas y sus familiares o para los victimarios? ¿Es la prescripción una institución absoluta en el ámbito de los ordenamientos jurídicos? No, no es una institución universal. Existen sistemas jurídicos, como por ejemplo, el anglosajón, que no la conocen o al menos no le dan un carácter general. En esta línea, debemos entender que los crímenes contra la humanidad se enmarcan en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que tiene por eje central la dignidad de la persona humana, donde el bien jurídico protegido se encuentra, indubitadamente, en un plano superior. ZAFFARONI sostiene que “si la prescripción de estos crímenes no presentase características diferenciales de la prescripción de los restantes, la inviabilidad de la prescripción de las acciones que emergen de ellos debería investigarse en otro campo. Adelantamos la tesis de que ello es así, aunque la remisión a otro campo no carece de significación para el propio ámbito de los fundamentos de la prescripción”. Al campo a que se refiere son las disposiciones del Derecho Penal Internacional, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario¹⁷. d. Por un Principio de Coherencia. Citamos a ese respecto igualmente a CAMPOS:

“Si de un mismo hecho nacen ciertas acciones, darles un tratamiento distinto no guarda coherencia. Por lo tanto, si de los crímenes contra la humanidad derivan diversas acciones (como la acción civil y la acción penal), ambas deben tener la misma suerte, es decir, se excepcionan de la prescripción extintiva”. Este fundamento es rebatido por quienes señalan que desde la época de la codificación ambas acciones han sido reguladas de forma distinta, y están establecidas con objetivos diferentes. La acción penal lleva a cabo el juicio de reproche desde la perspectiva de la culpabilidad, busca la paz social y, por otro lado, la acción civil es la proyectada a establecer la responsabilidad del infractor y recibir la reparación del daño, que será para la satisfacción del ofendido. Sin embargo, desde la óptica de los crímenes internacionales, se les debe dar un trato igualitario, debido a que los bienes jurídicos protegidos van más allá de la paz de una sociedad y



de la propiedad de un ciudadano, se ampara la dignidad de la humanidad completa. e. Enfoque centrado en las víctimas y en la humanidad. AGUILAR CAVALLLO expresa que el derecho penal interno está centrado en el reo, pero el Derecho Penal Internacional está elaborado en torno a la víctima, por lo cual, frente a los crímenes internacionales, los jueces nacionales deben realizar un análisis y aplicación de las normas de una forma diferente. Esta concepción obedece a “un cambio de la cuestión moral dentro del derecho, el cual fue iniciado por la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, que es la primera piedra de un derecho universal”. f. Principio Finalista. La persecución de los crímenes de lesa humanidad tiene un fin preventivo; uno de índole sancionador, y otro de índole reparador. Así, si operase la prescripción civil, no se permitirá que se cumplan a cabalidad los citados fines. Estos fines obedecen a “la relación del derecho internacional junto a la moral, que parece haber llevado a una legalización necesaria de la misma –tal es la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad– una justificación moral del poder, en nombre de un buen derecho”. ROULOT señala que en Francia la represión de los crímenes contra la humanidad es entendida como una obligación de ius cogens, que dio origen a la Ley de 26 de diciembre de 1964 tendiente a impedir la aplicación de la prescripción frente a estos ilícitos. Sin embargo, el problema que se ha presentado es el principio de la no retroactividad de la ley, pues se trata de juzgar hechos que fueron cometidos con anterioridad a la normativa especial, y que al aplicarla se encuentra con que el transcurso del tiempo hace operante la prescripción común²⁰. Al respecto, ZAFFARONI es claro: plantea “la retroactividad de la imprescriptibilidad de las acciones emergentes de crímenes contra la humanidad, incluso con anterioridad a la vigencia de la norma consuetudinaria de derecho internacional, pues refuerza el carácter criminal del ilícito, cuyos efectos siguen demandando reparaciones”. La norma consuetudinaria, a la cual se refiere, es la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, de 1968, a la cual la doctrina y jurisprudencia le reconocen la calidad de ius cogens. g. Principio de la reparación integral. Este principio es un tema de vital importancia, ya que se traduce en un derecho para el



afectado y una obligación para el infractor de los DD.HH., y se posiciona como el medio palpable de la represión de los crímenes contra la humanidad. Considérese Vuestra Señoría que la reparación integral presenta múltiples funciones; disuadir, sancionar, ejemplificar, y, sobre todo, restablecer el orden quebrantado cuando sea posible, o de una forma sustitutiva. ZAFFARONI nos enseña que “invocar la simple prescripción civil para negar cualquier derecho de reparación o de restitución en caso de crímenes contra la humanidad cometidos siglos anteriores no es una mera cuestión de neutralización del reclamo, sino un verdadero escándalo jurídico²²”. Que así, a la luz de lo aquí sostenido, se concluye que los crímenes de lesa humanidad, calificación atribuida a las violaciones a los DD.HH. cometidas durante el gobierno militar en Chile son de carácter imprescriptible, siendo excepción a la institución de la prescripción extintiva. Tal característica no es solo privativa del orden penal, sino que también alcanza a la acción civil que surge de tales ilícitos, pues otorgar reparación civil a las víctimas dota de operatividad a los DD.HH. y da respuesta a la obligación que compete al Estado de reparar de forma integral a los afectados.

IV. Sobre el Factor de Atribución de la Responsabilidad del Estado: Responsabilidad Objetiva

8. Que como se ha fallado reiteradamente por nuestra Corte Suprema, para la determinación de la procedencia de la responsabilidad del Estado no es necesaria la acreditación del elemento subjetivo (dolo, o culpa), puesto que dichos elementos no pueden encontrarse en una persona sin sentimientos, como lo es el Estado o su administración (persona jurídica).

9. Que con lo anterior, para determinar entonces la procedencia de la responsabilidad estatal, el agraviado debe probar la existencia de daño o perjuicio provocado; y la actividad (o inactividad) del órgano del estado que lo genera, y desde luego la relación de causalidad.

a. Existencia del daño o lesión. La Doctrina ha señalado que “basta la lesión de un interés legítimo y relevante de la víctima para que se entienda que ha sufrido un daño reparable”. Actualmente nadie podría negar la procedencia del daño moral en el marco de la responsabilidad, encontrándose aquella incluso su fundamento en nuestra propia Carta Fundamental.



En efecto, el aporte más relevante del texto Constitucional a la teoría de la resarcibilidad del daño moral ha sido la consagración como derechos fundamentales de las personas y merecedores de tutela jurisdiccional derechos no económicos como la vida, la integridad psíquica y física, la vida privada, la honra de la persona y su familia. La tesis de la “constitucionalización del Derecho Civil”, ha abonado la postura de que “el daño moral debe ser indemnizado incluso con mayores razones constitucionales que el daño meramente patrimonial”.

b. Actividad del Órgano en el Ejercicio de sus Funciones. Que como podrá constatar Vuestra Señoría al tenor de los hechos narrados y de la prueba que se rendirá oportunamente, la prisión y humillaciones de las que fui objeto se identifican con los actos de tortura para efectos de configurarse la responsabilidad del Estado, a la luz de los argumentos que pasamos a señalar:

b.1. El Delito de Tortura en el Ordenamiento Interno. La ley 20.357, que tipifica los crímenes de lesa Humanidad, Genocidio y Crímenes y Delitos de guerra, establece que:

Art. 7º: Será castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio, que, concurriendo las circunstancias descritas en el artículo 1º:

1º Torturare a otro que se encuentre bajo su custodia o control, infringiéndole graves dolores o sufrimientos físicos o mentales. Sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que deriven únicamente de sanciones ilícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas.

Si además de la realización de las conductas descritas en este numeral se causare alguna de las lesiones previstas en el artículo 397 del Código Penal o la muerte de la persona bajo custodia o control, siempre que el resultado fuere imputable a negligencia o imprudencia del hechor, la pena será de presidio mayor en su grado medio a máximo”.

Por su parte, el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (o Informe Valech), entendió a la tortura como: “Todo acto por el cual se haya infligido intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, castigarla por un acto que haya



cometido o se sospeche que ha cometido, intimidar o coaccionar a esa persona u otras, anular su personalidad o disminuir su capacidad física o mental, o por razones basadas en cualquier tipo de discriminación, siempre y cuando dichos dolores o sufrimientos se hayan cometido por un agente del Estado u otra persona a su servicio, o que actúe bajo su instigación, o con su consentimiento o aquiescencia”.

b.2 El Delito de Tortura en el Derecho Internacional. La Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1985, –convención en la cual Chile es parte- consagra en su texto:

“Art. 5.

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

“Art 2. Para los efectos de la Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente, por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.

10. Que con lo anterior, refuerza lo anterior el hecho de que la Corte Internacional de Justicia de la Haya considera a la prohibición de la tortura como *jus cogens*; significando aquello que no existe norma superior a aquella en el ámbito internacional. En otras palabras, y siguiendo el razonamiento de dicha Corte para alcanzar la conclusión antedicha, “la prohibición se encuentra fundamentada en una práctica internacional amplia y en la *opinio juris* de los Estados. Se encuentra en numerosos instrumentos internacionales de aplicación universal (...) y ha sido incorporada en el derecho interno de casi todos los Estados; finalmente, los



actos de tortura son regularmente denunciados en foros nacionales e internacionales”.

VI. Causalidad

12. No existe duda Vuestra Señoría que la causalidad se encuentra fehacientemente acreditada. De hecho, el mismo demandado Estado de Chile ha reconocido mi calidad de torturado, apareciendo yo en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (llamado coloquialmente Informe Valech) con el número de identificación 9.302.

VII. La tortura desde el prisma de la Psicología.

13. Como lo señala MÁRQUEZ, durante todos los tiempos la tortura ha sido utilizada en sus múltiples formas con el fin de controlar, someter y quebrantar la resistencia del sujeto para que aporte información y se transforme en un colaborador, incluso más allá de la etapa de los interrogatorios o bien, destruir su personalidad y poder manejarlo bajo el control de las instituciones a través de los más sofisticados instrumentos intentando llegar a los límites de la resistencia humana.

Dichas torturas generalmente van acompañadas de un proceso de encarcelamiento que provoca serias alteraciones en la vida de la persona y de su familia desde los aspectos económicos, hasta el deterioro de las condiciones del desarrollo normal del crecimiento de los hijos.

Por otra parte, la tortura provoca efectos traumáticos permanentes que en casos extremos puede llegar a la desintegración de la personalidad con complicaciones tan graves como las adicciones y el suicidio.

VIII. Tortura, Dolor Psíquico y Salud Mental

14. Entendemos al ser humano en su representación corpórea como el espacio físico, mental, psicológico, social y espiritual que vive en interrelación con los demás, en donde se es hombre o mujer.

Desde una aproximación histórica los cuerpos se han visto externos a los individuos; hoy se ha avanzado en un enfoque integral ya que ninguna acción humana se hace fuera del cuerpo y todo tipo de vivencias a través de las sensaciones y percepciones no operan sobre él, sino que son de él.

El dolor corporal se produce cuando un estímulo periférico alcanza una intensidad suficiente para descomponer el aparato protector de estímulos; esto es, cuando el yo es impotente para sustraer al estímulo, mediante



reacciones defensivas. Por lo tanto, el dolor y la angustia biológica, constituyen una reacción frente a un traumatismo capaz de descomponer el mecanismo protector.

Así como distinguimos dos clases de angustia somática y psíquica también debemos de admitir la existencia de un dolor corporal y otro psíquico. Esto es, el dolor es una sensación corporal que se origina como respuesta a la ruptura del aparato protector como una sensación desagradable específica de las regiones orgánicas excesivamente estimuladas.

La tortura sería el extremo de la angustia, del dolor somático y psíquico, considerada como un desastre causado por el hombre.

Es importante tomar en cuenta algunas clasificaciones hechas en diferentes tipos de tortura: física, psicológica y sexual, que tienen un carácter estrictamente de estudio ya que buscan facilitar la comprensión de los diferentes métodos de tortura, pero como hemos planteado anteriormente al ser humano desde un punto de vista integral se puede sostener que el torturador utiliza de manera indistinta los diferentes métodos y que la afectación repercute de una manera importante en la salud de las personas que la sufren.

15. La finalidad de la tortura es destruir al individuo al quebrar su personalidad, ya que los torturadores saben que pueden destruir la mente sin matar el cuerpo. Es por ello que los métodos de tortura se perfeccionan constantemente con el desarrollo de la ciencia y la tecnología para alcanzar este objetivo como: la privación del sueño, alimento y la restricción de sus necesidades fisiológicas como formas de castigo y cargas psicológicas las cuales se han visto obligadas a enfrentar las víctimas como parte de su sometimiento.

Y de conformidad a los hechos expuestos que dan cuenta de las torturas de las que fui objeto y a lo prescrito en los artículos 5, 6, 7, 19 y 38 de la Constitución Política de la República, artículo 4 de la Ley 18.575, las diversas fuentes de derecho internacional citadas que nuestra legislación ha reconocido como normas que Vuestra Señoría estime aplicables, vengo en solicitar respetuosamente se tenga por interpuesta la presente Demanda de Indemnización de Perjuicios por Responsabilidad del Estado en contra del Fisco de Chile, representado por don Natalio Eugenio Vodanovic Schnake,



ambos ya individualizados, someterla a tramitación, y en definitiva, acogerla en todas sus partes, declarando al efecto:

1. Que observándose la evidente responsabilidad del demandado por el daño provocado y verificándose los requisitos para su procedencia, se condene al Fisco de Chile a pagar a este demandante don Gerardo Ariel Gallardo Cortéz la suma de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos) por concepto de daño moral; y en subsidio de lo anterior, a la suma que Vuestra Señoría estime ajustada a Derecho en consideración al daño provocado;
2. Que observándose la evidente responsabilidad del demandado por el daño provocado y verificándose los requisitos para su procedencia, se condene al Fisco de Chile a pagar a la demandante doña Inés Del Carmen Soliz Milanca la suma de \$100.000.000 (cien millones de pesos) por concepto de daño moral; y en subsidio de lo anterior, a la suma que Vuestra Señoría estime ajustada a Derecho en consideración al daño provocado;
3. Que observándose la evidente responsabilidad del demandado por el daño provocado y verificándose los requisitos para su procedencia, se condene al Fisco de Chile a pagar a la demandante doña Doris Yanett Gallardo Moncada la suma de \$100.000.000 (cien millones de pesos) por concepto de daño moral; y en subsidio de lo anterior, a la suma que Vuestra Señoría estime ajustada a Derecho en consideración al daño provocado;
4. Que observándose la evidente responsabilidad del demandado por el daño provocado y verificándose los requisitos para su procedencia, se condene al Fisco de Chile a pagar a la demandante doña Laura Andrea Gallardo Soliz la suma de \$100.000.000 (cien millones de pesos) por concepto de daño moral; y en subsidio de lo anterior, a la suma que Vuestra Señoría estime ajustada a Derecho en consideración al daño provocado;
5. Que la sumas a la cuales sea condenada la demandada deban ser pagadas más los reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las misma, y en subsidio de lo anterior, en la forma que Vuestra Señoría determine.



6. Que se condena al demandado al pago de las costas de esta causa.

Al folio 7, con fecha 06 de Diciembre de 2021, se notificó al Abogado Procurador Fiscal en representación del Fisco de Chile.

Al folio 12 la demandada contestó la demanda, solicitando su rechazo en virtud de los siguientes antecedentes:

DE LA DEMANDA

El demandante Gerardo Ariel Gallardo Cortez, invocando su calidad de víctima de apremios ilegítimos, prisión ilegal y torturas, demanda al Fisco de Chile por la responsabilidad que tendrían agentes del Estado en la violación de sus derechos humanos y la necesidad de ser reparado por éste.

Reclama la suma de \$ 200.000.000 por el daño moral sufrido y, al efecto, describe las circunstancias, persecuciones e ilícitos a que fue sometido.

A partir de los mismos hechos, su ex cónyuge e hijas demandan también de perjuicios al Fisco, reclamando la suma de \$ 100.000.000 para cada una de ellas.

Invocan como fundamento normativo los artículos 38 inciso 2° de la CPR; artículo 2314 y siguientes de Código Civil, tratados internacionales de derechos humanos, citando la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, entre otros, además de jurisprudencia judicial.

I. RESPECTO DE LA DEMANDA DE GERARDO ARIEL GALLARDO CORTEZ.

1.- RESPECTO A LOS HECHOS EN QUE SE FUNDA LA DEMANDA.

Esta parte no discute que el demandante forme parte del listado de víctimas de tortura de que da cuenta en Informe Valech.

Sin embargo, más allá de su inclusión en el referido informe, y en tanto no se nos presente la certificación oficial con el relato aceptado por la comisión que concuerde con lo sostenido en el libelo, esta parte no está en condiciones de aceptar que los hechos descritos en la demanda para fundar el daño cuya indemnización se reclama, hayan ocurrido de la manera que los narra la actora, ni tampoco puede esta parte reconocer la extensión y alcance de dichos hechos.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PBWFXLKJMXC

En consecuencia, el actor a lo menos, deberá demostrar las particulares circunstancias que relata en la demanda.

2.- EXCEPCIÓN DE REPACIÓN.

Improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el demandante.

Marco general sobre las reparaciones ya otorgadas.

No resulta posible comprender el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos si no se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional. En efecto, dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior —y desde— lo que ya es común considerar, el ámbito de la llamada "Justicia Transicional". Sólo desde esa óptica puede mirarse en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria.

En efecto, el denominado dilema “justicia versus paz” es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso "nunca más". En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema.

La complejidad reparatoria.

Como bien lo expresa Lira, los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno de Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional fueron “(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse”.

En lo relacionado con aquel segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de “propuestas de reparación” entre las cuales se



encontraba una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, “reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”.

Asumida esta idea reparatoria, la Ley N° 19.123 y otras normas jurídicas conexas han establecido los diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional. En este sentido, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber

- a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero;
- b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y
- c) Reparaciones simbólicas.

Por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas. Un análisis de estas compensaciones habilitará a V.S. a verificar el ámbito compensatorio que ellas han cubierto.

Reparación mediante transferencias directas de dinero.

Diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo también -como se ha mencionado- a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos.

Es necesario destacar que en la discusión legislativa de estas normas se enfrentaron principalmente dos posiciones. Por un lado, quienes sostenían que la reparación que se iba a entregar debía hacerse a través de una suma única de dinero mientras aparecieron otros que abogaban por la entrega de una pensión vitalicia.

Ello no implicaba de manera alguna que la primera opción tendría



efectos indemnizatorios y no así la segunda. Ambas modalidades tendrían fines innegablemente resarcitorios.

En términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2013, en concepto de:

- a) Pensiones: la suma de \$ 176.070.167.770.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$ 313.941.104.606, como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech);
- b) Bonos: la suma de \$41.659.002.416.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$ 20.777.324.047.- por la ya referida Ley 19.992; y
- c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$ 1.464.702.888. asignada por medio de la Ley 19.123.-

En consecuencia, sólo a diciembre de 2013, el Fisco había desembolsado la suma total de \$ 553.912.301.727.-

Siguiendo desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que podamos valorizarla para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

Pues bien, el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar.

Como puede apreciarse el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones es bastante alto. Ellas son, como se ha entendido de manera generalizada, una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos obteniéndose con ello, compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Reparaciones específicas. Ley 19.992 y sus modificaciones sobre prisioneros y torturados políticos.

En lo tocante al caso que nos ocupa, cabe señalar que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de la ley N° 19.992 y sus modificaciones.



En efecto, la ley 19.992 y sus modificaciones estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas.

Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$ 1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$ 1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

En este caso, el Instituto de Previsión Social (IPS), informará, conforme se solicita en otrosí, que la parte demandante figura calificada como víctima de Prisión Política y Tortura, por lo que le asiste derecho a los beneficios de reparación dispuestos en la Ley N°19.992. Por ello, dicho Instituto le concedió pensión vitalicia de reparación, de cargo fiscal. El total acumulado a la fecha de notificación de la demanda alcanzará un millonario valor, considerando el monto mensual de la pensión.

Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas.

Tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. En efecto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase.

En este sentido, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS. En la especie, el actor reconoce expresamente en su demanda ser titular y beneficiario de dicho Programa.



Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad cuentan con un equipo PRAIS en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

A nivel presupuestario, PRAIS cuenta con un financiamiento de continuidad desde el año 2006. El año 2014, el Programa sostuvo un incremento presupuestario importante, siendo el presupuesto global de M\$ 4.580.892.13 Este presupuesto se distribuye por Servicio de Salud, permitiendo cubrir gastos asociados al recurso humano de los equipos de salud PRAIS, equipamiento y para la adquisición de ayudas técnicas o prestaciones que requieren beneficiarios en el extra sistema, focalizando principalmente en la población directamente afectada y en el artículo 10 de la Ley 19.992.- Sin perjuicio de ello, como usuarios del sistema público de salud, los beneficiarios adquieren los derechos establecidos para todos los usuarios FONASA; obtienen el derecho de organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de Autoridad Sanitaria crea, tanto en los establecimientos como a nivel de la red y secretaría regional, y; adquieren el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIS en la difusión del programa y en la promoción del resto de los Derechos Humanos.

Se les ofrece asimismo apoyo técnico y rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Igualmente se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores. El organismo encargado de orientar a las personas para el ejercicio de este derecho es la División de Educación Superior del Ministerio de Educación.

A modo de ejemplo, un hijo o nieto del beneficiario, y siempre que el



beneficiario original no hubiese hecho uso de él, ha podido postular a las becas Bicentenario, Juan Gómez Millas, Nuevo Milenio o a las establecidas para estudiantes destacados que ingresan a la carrera de pedagogía, en la forma y condiciones que establece el reglamento de dichas becas.

Asimismo, se concedieron beneficios en vivienda, correspondientes al acceso a subsidios de vivienda.

Reparaciones simbólicas.

Al igual que todos los demás procesos de justicia transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD.HH. Se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor -siempre discutible en sus virtudes compensatorias-, sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral.

La doctrina, en este sentido, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables.

Así, Fueyo, refiriéndose a la naturaleza de la reparación del daño extrapatrimonial, señala que debe descartarse que sea una reparación compensatoria del modo que se entiende en el derecho patrimonial, “pues aquí resulta de partida absurdo compensar, esto es, fijar una medida igual o equivalente, siendo que el daño mismo a indemnizar no es susceptible de medición exacta. En contraposición, se trata simplemente de una indemnización satisfactiva, esto es, que intenta satisfacer a la víctima. Tomando este verbo justamente en dos de sus acepciones oficiales, según el Diccionario de la Real Academia Española, resulta lo siguiente: a) “Hacer una obra que merezca perdón de la pena debida” y b) “Aquietar y sosegar las pasiones del ánimo”.

En esta compleja tarea de entregar una compensación satisfactiva



destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica como las siguientes:

- a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993;
- b) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido.

Desaparecido. Se elige el día 30 de agosto de cada año en atención a que la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha instituido este día como día internacional del detenido-desaparecido.

- c) La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta obra fue inaugurada el 11 de enero de 2010 y su objetivo es dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre los años 1973 y 1990 y que quedaron plasmados en imágenes, íconos, documentos o monumentos.

- d) El establecimiento, mediante Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos.

- e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las Infracciones a los DDHH tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otras. Destacan, el “Memorial de los prisioneros de Pisagua” en el Cementerio de esa ciudad; el Mausoleo “Para que nunca más” en el Cementerio 3 de Iquique; el Memorial “Si estoy en tu memoria, soy parte de la historia” en las afueras del Cementerio Municipal de Tocopilla; el Memorial “Parque para la Preservación de la Memoria Histórica de Calama” en el camino a San Pedro de Atacama; el Memorial en homenaje a 31 víctimas de Antofagasta en la puerta principal del Cementerio General de la ciudad; el “Memorial en homenaje a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región de Atacama” en el Frontis del Cementerio Municipal de esa ciudad; el “Memorial por los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos” en la Plaza de Armas de Curacaví; el “Memorial a las víctimas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas del Partido



Socialista” en la sede de este partido; el "Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca" en esa ciudad; la Escultura de la Mano, en calle Rubén Darío de esta ciudad, como la Casa de la Memoria, sita en calle Pérez Rosales, ex dependencia de la CNI en la misma Valdivia, Memorial en el Puente Estancilla, Memorial en el Cementerio todos en la ciudad de Valdivia, el "Memorial Escultórico de los Derechos Humanos de Punta Arenas" en el Cementerio Municipal de esa ciudad.

Todos ellos unidos a un sinnúmero de otras obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, pinturas, etc.

La identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas.

De todo lo expresado hasta ahora puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DDHH.

Así las cosas, tanto la indemnización que se solicita en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente.

En este punto el fallo Domić Bezic, Maja y otros con Fisco ha sido especialmente gráfico cuando afirma que una pretensión indemnizatoria es incompatible con los beneficios legales entregados por la Ley 19.123 pues “aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria del daño moral cuyo resarcimiento pretende la acción intentada en este juicio y ellos son financiados con recursos fiscales, conforme se desprende de lo establecido en el Título VI de ese texto legal”.

Lo anterior ha sido ratificado por la Excma. Corte Suprema que, en



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PBWFXLKJMXC

sentencia de casación de fecha 30 de enero de 2013, reiteró la incompatibilidad de la indemnización pretendida con los beneficios de fuente estatal por los mismos hechos.

En el mismo sentido, diversas sentencias ya habían insistido en que el propósito de estas leyes fue precisamente “reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”, lo que constituye un factor con resoluciones de Tribunales Internacionales, relativas a la improcedencia de la indemnización.

En efecto, cabe indicar que órganos internacionales de tanta importancia como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas.

Así, en el caso Almonacid se señaló expresamente que “la Corte valora positivamente la política de reparación de violaciones a derechos humanos adelantada por el Estado (supra pár. 82.26 a 82.33), dentro de la cual la señora Gómez Olivares y sus hijos recibieron aproximadamente la cantidad de US\$ 98.000,00 (noventa y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América), más beneficios educacionales correspondientes aproximadamente a US\$ 12.180,00 (doce mil ciento ochenta dólares de los Estados Unidos de América). Teniendo en cuenta todo lo anterior -prosigue la sentencia- el Tribunal considera no ordenar el pago de una compensación económica por concepto de daño inmaterial (...)”.

En este mismo sentido, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas que no genere desigualdades.

Un documento denominado “Herramientas Jurídicas para Estados Post-Conflictos” (Rule of Law for post-conflicts states) se ha referido expresamente a los programas de reparación. En él se ha reconocido la existencia de un problema al exigir indemnización por la vía de los



programas de reparación y paralelamente, ejercer una acción civil, por la vía judicial.

Así, indica que una vez que el Gobierno ha hecho esfuerzos de buena fe en crear un sistema administrativo que facilita la entrega de beneficios a las víctimas, permitir a los mismos beneficiarios iniciar litigios contra el Estado genera el peligro de obtener un doble beneficio por el mismo daño. Pero todavía peor, agrega que ello pone en riesgo el sistema de reparaciones en su totalidad, puesto que mientras el primer problema puede ser fácilmente solucionado estipulando que no pueden perseguirse beneficios dos veces por la misma violación, el segundo no es fácilmente evitable toda vez que los beneficios obtenidos en los tribunales pueden fácilmente sobrepasar a los de un programa masivo de reparaciones. Esto puede generar un cambio en las expectativas y generalizar una sensación de desilusión con los programas administrativos. Incluso más, este cambio puede ser motivado por casos que seguramente no son representativos de todo el universo de víctimas y que más encima vienen a acentuar las desigualdades sociales entre las víctimas. Así, víctimas más educadas o pertenecientes a las ciudades tienen normalmente una probabilidad más alta de conseguir reparaciones por la vía de la litigación civil que víctimas más pobres, menos educadas, que habitan en el campo o que pertenecen a grupos étnicos, raciales o religiosos marginados.

En la misma línea, tal como indica Lira, es precisamente el rechazo a nuevas peticiones de indemnización lo que fortalece los programas de Justicia Transicional. Lo contrario, esto es, dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios, genera inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de reparación.

En conclusión, estando la acción interpuesta en autos basada en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, al tenor de documentos oficiales que serán acompañados en su oportunidad, opongo la excepción de reparación por haber sido ya indemnizado el demandante de autos.



3.- EN SUBSIDIO, EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA.

En subsidio de la excepción de reparación alegada, opone a la demanda la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida conforme a los siguientes argumentos; y a todo evento con relación de aquellos actores respecto de los cuales no se acreditaren satisfacciones del tipo de las antes señaladas.

Normas de prescripción aplicables.

Opongo la excepción de prescripción de la acción de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2.497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescrita, se rechace la demanda en todas sus partes.

Según el relato del demandante, la detención, las amenazas, los apremios y torturas de que fue víctima, se produjeron desde septiembre de 1973.

Es del caso que, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de la propia víctima de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil.

En consecuencia, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2.332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechace íntegramente la acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.

En subsidio, en caso que SS., estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opongo la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil que contesto, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.



Generalidades sobre la prescripción.

Por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles. *“Cuando no se establece la prescripción de un determinado derecho y tampoco su imprescriptibilidad, ese derecho, de acuerdo con la regla general, es prescriptible”.*

Por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe.

Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras. Por eso es que la jurisprudencia ha señalado que *“para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad.”*

Fundamento de la prescripción

La prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida.

Es de destacar que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora e indispensable en nuestro orden social. Está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas.

Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria.

La indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción.

Sobre el particular debe considerarse, como en forma reiterada se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido reiterada jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una



acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.

En efecto, basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción, incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos, por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

4.- EN CUANTO AL DAÑO E INDEMNIZACIÓN RECLAMADA.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, procedo a formular las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido.

Fijación de la indemnización por daño moral.

Con relación al daño moral hacemos presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales.

Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente.

Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.

En términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso.

Tratándose del daño puramente moral, la finalidad descrita no es alcanzable de ninguna manera, así como tampoco puede plantearse que compense en términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquél. El daño moral no se borra por obra de la



indemnización. La pérdida o lesión producida por él permanece cualquiera sea la magnitud de la suma de dinero que se perciba.

Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Ha dicho la Excma. Corte Suprema: *“Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía inmaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable, sino procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido”*.

Es en la perspectiva antes indicada que hay que regular el monto de la indemnización que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extra patrimonial sufrida.

Por otra parte, es dable advertir que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

No habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago. En tal sentido, la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral, resulta excesiva teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.



En subsidio de las excepciones precedentes de reparación y prescripción, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

En efecto, en subsidio de las excepciones de reparación y prescripción de la acción deducida, esta parte alega en todo caso que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, SS., debe considerar todos los pagos recibidos por el actor a través de los años por parte del Estado conforme a las leyes de reparación (19.123, 19.980, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirá percibiendo a título de pensión vitalicia, y también los beneficios extra patrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral. De no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

También es pertinente hacer presente a SS., que para la adecuada regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia, lo que implica rebajar sustancialmente el monto pecuniario demandado.

5.- PAGO DE REAJUSTES E INTERESES.

Además de lo alegado, hago presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

Cabe mencionar lo anterior, pues el actor solicita el pago de reajustes e intereses desde la notificación de la demanda.

Pues, bien a la fecha de interposición de la demanda de autos a tramitación y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse.

Lo anterior implica que, en casos como el de autos, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha



anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

El reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. Desde esta perspectiva, no procede aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha anterior a la determinación del monto respectivo por sentencia ejecutoriada.

Respecto de los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

Por consiguiente, el hipotético caso de que SS., decida acoger la acción de autos y condene a mí representado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y mi representado incurra en mora.

Por lo señalado pide tener por contestada la demanda de indemnización de perjuicios deducida en autos y, en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar dicha acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

II. RESPECTO DE LA DEMANDA DE LOS OTROS TRES ACTORES (ex cónyuge e hijas de un detenido Valech).

1.- Controversia de los hechos

Que, en relación con los hechos que estos tres actores señalan en la demanda, esta parte sólo aceptará los que, en definitiva, resulten legalmente acreditados en estos autos, desconociendo todos aquellos no sean probados debidamente, por no tratarse de personas reconocidas como víctimas en el Informe Valech.

Así, negamos los hechos descritos en la demanda. No consta a esta defensa Fiscal la efectividad de las alegaciones formuladas, por lo que deben ser negadas en esta contestación.

De acuerdo con lo anterior, en esta etapa procesal y para los efectos de la prueba que deberá rendirse a su respecto, este demandado controvierte la totalidad de los hechos en que se funda la demanda, tanto en la forma en



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PBWFXLKJMXC

que ocurrieron, como la existencia, naturaleza, monto y relación de causalidad de los perjuicios cuya indemnización se reclama, sobre todo teniendo en consideración que al momento de los hechos denunciados por Inés Soliz Milanca, ocurridos entre 1973 y 1974, ella y el señor Gallardo Cortéz no se habían conocido y menos habían formado una familia; por su parte, las dos hijas demandantes no habían nacido.

En particular, estos tres actores no aparecen incluidos en ningún listado o nómina de personas reconocidas como víctimas de violaciones a los derechos humanos, por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. En razón de lo dicho, debemos discutir la veracidad de todos los hechos descritos en la demanda, incluidos los perjuicios y el nexo causal.

Así las cosas, discutimos y negamos la calidad de víctimas de violación a los derechos humanos alegadas por estos tres demandantes.

Corresponderá a los actores entonces acreditar la veracidad de sus dichos y la demostración de los hechos, daños y nexo causal que alegan en la demanda.

2.- Improcedencia de la demanda por total alejamiento y desconexión de los demandantes con los hechos fundantes de su acción.

Inés Soliz Milanca, Doris Gallardo Moncada y Laura Gallardo Soliz, dicen demandar por su propio sufrimiento, ocasionado a raíz del actuar de los agentes del Estado. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido víctima de dicho actuar, sino que tales tres demandantes, a consecuencia de actos y hechos jurídicos posteriores, pretenden acoplarse a la demanda principal, realzando un lazo familiar para vincularlo al daño alegado de la otra demandante.

Inés Soliz Milanca habría conocido al demandante principal tiempo después de ocurridos los hechos. Expresa que cuando conoció al señor Gallardo Cortéz supo por sus relatos lo que le había ocurrido, agregando que en 1983 se casaron. Afirma, también, que el año 1989 cesaron su convivencia en común y que, el año 2018, se divorciaron.

Por su lado, Doris Gallardo Moncada nació el 3 de mayo de 1991 y Laura Gallardo Soliz Parada el 24 de septiembre de 1980, es decir, 18 y 7 años, respectivamente, después de la detención del padre. Ellas ni siquiera habían nacido cuando ocurrieron los hechos.



De esta manera, la posterior relación de matrimonio y los hechos jurídicos, también posteriores, de nacimiento de las otras dos demandantes, constituyen un vínculo con el demandante principal insuficientes para sostener esta acción, porque son completamente ajenos y posteriores a los hechos originales causantes del daño a la víctima.

Los demandantes intentan crear un curso causal artificial y forzado, a partir de hechos incorporados con posterioridad.

Lo expresado se resume en que los aparentes hechos dañosos denunciados por el padre, son anteriores a la existencia de la relación matrimonial y filial con los demás actores; y por consecuencia sin vinculación causal ninguna. La ocurrencia de los hechos denunciados por el padre y cónyuge nunca afectaron coetáneamente a los demás pretendientes, pues éstos no existían a la fecha de su ocurrencia. No existe ninguna relación causal co-existente de la cual derive responsabilidad extracontractual.

Tan cierto es lo anterior que el supuesto daño de la cónyuge e hijas sobreviene por efecto del acto matrimonial y reproductivo, de lo que se sigue que tales circunstancias, de la voluntad y libre determinación de los cónyuges y progenitores, son posteriores en varios años al daño de la víctima directa, y por ende sin relación con dicho perjuicio ni los actos que lo causaron.

El daño, para ser indemnizado, debe ser directo, lo que respecto a la cónyuge e hijas no acontece. “La pregunta por la imputación objetiva de los daños se refiere esencialmente a los límites de la responsabilidad por los efectos consecuentes que pueden seguirse de un daño inicial. La doctrina chilena ha tratado esta exigencia a propósito del daño, expresando que sólo se indemnizan los daños directos.”

Más claramente, aunque de un daño inmediato se pueda seguir un daño mediato, su diferencia se relaciona “con una de las cuestiones más importantes del derecho de la responsabilidad civil, como es la distinción entre daños directos e indirectos.” Y “el derecho debe poner un límite a los daños mediatos por los cuales se responde, porque llega un momento en que deja de ser razonable considerar que una remota consecuencia dañina puede ser imputada al hecho culpable inicial del demandado. Esta idea se expresa en el requisito, tratado a propósito de la causalidad, de que el daño



sea directo en relación con este hecho, porque de acuerdo con la norma del artículo 1558, la responsabilidad alcanza sólo a los daños que se siguen directamente del hecho del demandado”.

En conclusión, el señalado daño referido por la cónyuge e hijas no es susceptible de indemnización, o por lo menos, no lo es respecto del Fisco, por lo que la demanda debe rechazarse al respecto.

3.- Excepción De Prescripción Extintiva De La Acción Deducida Según Reglas Generales.

Opone la excepción de prescripción de las acciones, la que resultando manifiesta de la mera contrastación entre la época del acto que los tres actores señalan como causante del supuesto daño impugnado y la fecha de ejercicio de la actual acción, se sustenta en las siguientes razones:

Estos actores fundan su demanda en el perjuicio que les habría provocado el actuar de agentes del Estado. Sin embargo, ellos no tienen tal calidad de víctimas, por lo tanto, no les son aplicables las normas sobre imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

Por su parte, el demandante principal, según su relato, estuvo detenido aproximadamente un año y dos meses entre 1973 y 1974.

El artículo 2332 del Código Civil dispone que las acciones que concede el Título XXXVI del Libro IV, por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto. Aplicada esta regla, y teniendo en cuenta que el acto fundante de la demanda ocurrió entre los años señalados, la acción de los demandantes se extinguió el año 1994, y el libelo que la contiene sólo ingresó a tramitación el 26 de octubre de 2021, y e notificó a mi parte el 6 de diciembre de 2021, es decir, cuando el lapso prescriptivo estaba superado en 30 años.

Así, habiendo sido notificada la demanda recién el día 6 de diciembre de 2021, es decir, transcurridos más de 4 años desde la perpetración de los hechos supuestamente dañosos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, la acción interpuesta se encuentra prescrita, debiendo así declararlo SS., para consecuentemente rechazar la demanda en esa parte, con costas.

4.- Falta de legitimación activa de los demandantes.



Los demandantes Inés Soliz Milanca, Doris Gallardo Moncada y Laura Gallardo Soliz, concurren a estrados, supuestamente en la calidad de víctimas de daño moral por repercusión o rebote, producto de la detención de don Gerardo Gallardo Cortéz, víctima esta último de torturas y prisión política.

Sin embargo, estos otros tres demandantes no figuran como víctimas de prisión política y tortura, en ninguno de los informes emitidos por la Comisión Valech, en diciembre de 2004, julio de 2005 y agosto de 2011.

No teniendo la calidad de víctimas, carecen de legitimación activa para demandar al Fisco de Chile. Así lo ha señalado, recientemente, sentencia Rol C-787-2018 del Segundo Juzgado Civil de Concepción, de fecha 5 de diciembre de 2018, confirmada, el 11 de junio de 2019, por la I. Corte de Apelaciones de Concepción, bajo el Rol 472-2019.

El artículo 1698 del Código Civil dispone que: “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”. Pues bien, es labor de los demandantes acreditar todas y cada una de las circunstancias que sirven de basamento a su acción, y no constando ellas en autos, es lógico concluir que los actores carecen de acción para enderezar la presente demanda en contra del Fisco de Chile. El daño moral para ser indemnizado debe ser personal, actual, real y cierto, lo que significa que solo quien lo ha sufrido puede demandar su reparación. Si bien el daño reflejo o por repercusión -en el evento de considerar así el que proponen tales actores-, se puede considerar un daño personal, este solo puede ser indemnizado cuando esté dentro de ciertos límites. La muerte normalmente genera un daño reflejo para sus familiares preexistentes o también las graves lesiones corporales, tales como la gran invalidez. En el caso sub-lite, los hechos relatados no pueden considerarse que se encuentren englobados en alguno de los dos casos que la doctrina y la jurisprudencia han planteado como causantes de daño reflejo (muerte o incapacidad), ni que los referidos actores tengan la condición de víctima de delitos de lesa humanidad.

Durante mucho tiempo, incluso la jurisprudencia francesa, limitaba el daño moral solo al directamente afectado, en caso de que este sobreviviera al hecho dañoso.



Actualmente, si bien se ha extendido a casos en el que la víctima directa no ha fallecido, solo se ha extendido a casos de gran invalidez.

El mismo principio se ha venido imponiendo en la jurisprudencia española, en la que se exige que las lesiones corporales de la víctima inicial sean graves para que el daño moral, por rebote, sea objeto de compensación económica.

Finalmente, es importante indicar que los demandantes, indican haber sufrido un daño reflejo o por rebote, que ni siquiera precisan, y respecto del cual no existe causalidad alguna con la detención y tortura de la demandante principal, evento que se produjo hace 35 años aproximadamente, época en que la actora cónyuge de la detenida Valech aún no lo conocía, y en la que las actoras hijas, no habían nacido.

Extender el daño moral por repercusión a extremos tales como los descritos en esta demanda genera un injusto que afecta a la legitimidad del interés protegido, con la responsabilidad civil y, por ende, debe ser rechazado.

5.- Inexistencia de relación de causalidad.

Sin perjuicio de la alegación de controversia de los hechos, y como ya anticipamos previamente, opongo la alegación la inexistencia de relación de causalidad entre los hechos sufridos por don Gerardo Ariel Gallardo Cortez (cónyuge y padre de las actoras), y los daños alegados en la demanda.

A. En efecto, se incluyen como daños en relación con los hechos de la demanda una serie de consecuencias que, sin perjuicio de la controversia de los hechos ya planteada por esta parte, de acreditarse estos, no tienen relación de causalidad con los daños alegados, pues no son necesaria consecuencia directa de los hechos alegados.

De esta forma, no sólo debe haber entre el hecho atribuido y el daño una relación de causalidad, sino que, además, de acuerdo a nuestro derecho - en particular lo que disponen los artículos 2.314 y 2.329 del Código Civil -, esa relación debe cumplir con la doble exigencia de ser directa y necesaria.

Que la causalidad sea directa, significa que entre el hecho atribuido al demandado y los daños no ha de interponerse ninguna otra u otras causas; y que sea necesaria, significa que debe ser indispensable (sin ella, el efecto no se habría producido) e inevitable (producida, el efecto es forzoso, no puede dejar de ocurrir).



Esta exigencia, de que la relación de causalidad sea directa y necesaria es una doble exigencia que se desprende de los artículos 2.314 y 2.329 del Código Civil: el primero estatuye “el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro”, en tanto que el segundo establece que “por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona” deberá ser indemnizado o reparado.

Así lo ha entendido desde siempre, entre nosotros, la doctrina. Por ejemplo, en los años cuarenta del siglo pasado, la doctrina afirmaba que “Hay relación de causalidad cuando el hecho – o la omisión – doloso o culpable es la causa directa y necesaria del daño, cuando sin él éste no se habría producido”; que “Lo esencial es que el dolo o la culpa haya sido su causa directa y necesaria, que, a no mediar aquél o aquélla, el daño no se habría producido”; y que “Lo esencial es que el daño sea la consecuencia necesaria y directa del hecho ilícito, que en cualquier forma o condiciones en que el daño se presente, éste no se habría producido sin el hecho doloso o culpable”.

Más recientemente, se ha sostenido que la causalidad es “el vínculo que encadena un hecho (acción u omisión) con el resultado que se presenta como consecuencia directa, necesaria y lógica de aquél”.

La doctrina, por su parte, se encuentra en perfecta armonía con lo expuesto en los acápites anteriores, desde que, como es sabido, exige como elementos o requisitos para la concurrencia de toda responsabilidad extracontractual, los siguientes: a) el hecho del hombre (acción u omisión); b) la antijuridicidad de ese hecho; c) la imputabilidad del mismo; d) la existencia del daño; y, además, e) la relación de causalidad entre el hecho y su consecuencia dañosa.

Reiteramos, entonces, que, al tenor de la normativa citada, y de la doctrina existente sobre la materia, la responsabilidad estatal por daños exige la concurrencia copulativa de todos y cada uno de los cuatro requisitos antes mencionados, de manera tal que, la ausencia de uno solo de ellos, impide que esa responsabilidad nazca, y, por consiguiente, ninguna obligación de indemnizar puede hacerse efectiva en el patrimonio estatal.

B. A mayor abundamiento, la decisión de establecerse en pareja y tener hijos fue muy posterior a los hechos que relata don Gerardo Gallardo. Entre



1973 y 1974, aún no se conocían, su relación romántica se inició años después de la época de la detención, casándose en 1983. La demandante decidió formar familia con el señor Cortéz conociendo y aceptando su situación mental, emocional y psicológica, y aceptó tales circunstancias, en virtud del ejercicio de su autonomía. Fue una decisión personal y libre, por lo tanto, no puede culpar al Fisco de las decisiones que tomó libremente.

Por otro lado, el desempeño del demandante como padre, relatados en la demanda por la cónyuge y las hijas, le es inoponible al Fisco, pues, como ya se explicó, su decisión de tener hijos es posterior a los hechos en los que fundamenta la responsabilidad. Así, no existe ninguna conexión entre los hechos invocados y el daño que estos tres actores dicen haber sufrido.

6.- Respecto al daño y a los reajustes e intereses.

Respecto a los montos demandados a título de indemnización por daño moral, nos remitimos expresado, *mutatis mutandis*, a las alegaciones de la contestación respecto del demandante principal, dándolas por reproducidas.

Asimismo, respecto a los reajustes e intereses solicitados por los demandantes por repercusión, damos por reproducidos los fundamentos entregados para su rechazo en la contestación respecto de la demandante principal.

Por lo señalado, pide tener por contestada la demanda de indemnización de perjuicios deducida en autos y, en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar dicha acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

Al folio 14, el demandante evacuó el trámite de la réplica.

Al folio 18, la demandada evacuó el trámite de la réplica.

Al folio 22, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que rola en autos.

A fojas 85, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a fin de evitar repeticiones, se dan por reproducidos los escritos fundamentales de demanda y de contestación, así como la parte petitoria de los mismos.



**RESPECTO DE LA DEMANDA DE GERARDO ARIEL
GALLADOR CORTEZ**

SEGUNDO: Que, como ha señalado la Excm. Corte Suprema (rol N° 13.699-15), las acciones civiles tendientes a obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y establecimiento normativo en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado de Chile a reconocer y proteger este derecho a la *reparación íntegra* en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política.

Los artículos 1.1. y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagran la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos y queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de Derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de ese hecho. Éstas normas de rango constitucional imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y, en especial, a los tribunales nacionales en tanto éstos no pueden interpretar las normas de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de derecho internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile. Por esta razón, no resultan aplicables a estos efectos las normas de Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, pues ellas contradicen lo dispuesto en la normativa internacional.

TERCERO: Que, en efecto, estas normas de rango constitucional imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y, en especial, a los tribunales, en tanto éstos no pueden interpretar las normas de Derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de Derecho internacional de los *Derechos Humanos*, estatuto normativo reconocido por Chile, que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile.



En consecuencia, no resultan aplicables las normas del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, como pretende el Fisco demandado, pues ellas contradicen, como se dijo, la normativa internacional.

Así las cosas, se rechazará la excepción de prescripción extintiva, alegada de forma subsidiaria por la demandada, como se dirá en lo resolutivo del fallo.

CUARTO: Que, como se dirá en lo resolutivo, también se rechazará la excepción de reparación, alegada como excepción principal, fundada en que el actor ya fue indemnizado con ocasión del otorgamiento de pensiones de reparación de la Ley N° 19.123 y sus sucesivas modificaciones, y en virtud de la Ley N° 19.980, pues ello contradice la normativa internacional antes señalada y porque el Derecho interno sólo es aplicable si no está en contradicción con esa preceptiva, de modo que la responsabilidad del Estado siempre queda sujeta a las reglas del Derecho internacional.

La normativa invocada por el Fisco no contempla incompatibilidad alguna con la indemnización que aquí se persigue y no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación, y que las asume el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación invocada por el demandado. Así, ello no supone una renuncia de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley, pues la única limitante de quienes reclaman un daño como consecuencia del actuar de agentes del Estado es demostrar la existencia de dicho detrimento y la relación con la víctima para plantear su pretensión.

QUINTO: Que el *daño moral* es la lesión o agravio, efectuado culpable o dolosamente, a un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona y que es imputable a otro. Esta particularidad hace que no puedan aplicarse al momento de precisar su existencia y entidad, las mismas reglas utilizadas para la determinación de los daños materiales, pues en tal evento se trata de una alteración externa y fácilmente perceptible, lo que no acontece en el plano subjetivo. El menoscabo moral, por su índole netamente subjetiva y por su fundamento arranca de la propia naturaleza



afectiva del ser humano, no es, sin duda, de orden puramente económico y no implica, en consecuencia, un deterioro real en el patrimonio de quien lo sufre, susceptible de prueba y de determinación directa, por lo que queda enteramente entregado a la regulación prudencial, sobre la base de presunciones, especialmente, habida consideración de aspectos tales como las circunstancias en que se produjo y todas aquellas que influyeron en la intensidad del dolor y sufrimiento experimentado.

SEXTO: Que para acreditar los fundamentos de su acción, el demandante rindió prueba documental, legalmente acompañada y no tachada, consistente en:

1. Copia de la página N° 624 del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura.
2. Certificado de Matrimonio registrado en la Circunscripción de Río Bueno, Numero de Inscripción 33 del año 1983.
3. Certificado de Nacimiento registrado en la Circunscripción de Puente Alto, Numero de Inscripción 2.076 del año 1991.
4. Certificado de Nacimiento registrado en la Circunscripción de La Unión, Numero de Inscripción 814 del año 1980.
5. Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capitulo VIII Consecuencias de la prisión política y la tortura: Las Consecuencias en las víctimas; págs. 497-498, inclusive.
6. Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capitulo VIII Consecuencias de la prisión política y la tortura: Lesiones y enfermedades; págs. 498 a la 501, inclusive.
7. Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capitulo VIII Consecuencias de la prisión política y la tortura: Consecuencias psicológicas; págs. 501 a la 503, inclusive.
8. Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capitulo VIII Consecuencias de la prisión política y la tortura: La tortura como experiencia traumática; págs. 503 a la



506, inclusive.

9. Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo VIII Consecuencias de la prisión política y la tortura: Consecuencias en las relaciones familiares; págs. 506 y 507, inclusive.
10. Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo VIII Consecuencias de la prisión política y la tortura: Consecuencias sobre la vida sexual de las personas; págs. 507 y 508, inclusive.
11. Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo VIII Consecuencias de la prisión política y la tortura: Consecuencias en los niños; págs. 508 y 509, inclusive.
12. Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo VIII Consecuencias de la prisión política y la tortura: Consecuencias psicosociales; págs. 509 a la 512, inclusive.
13. Informe Características del daño y trauma en afectados directos de violaciones a los DDHH, realizado por el psicólogo Freddy Silva G. en su carácter de Coordinador de Equipo Especializado PRAIS del Servicio de Salud Aconcagua, en fecha 16 de octubre de 2017.
14. Conferencia internacional Consecuencias de la tortura en la salud de la población chilena: Desafíos del Presente, realizada por la Unidad de Salud Mental de la división de salud de las personas del Ministerio de Salud con la colaboración de profesionales, representantes de equipos PRAIS de RM, de las organizaciones no gubernamentales e instancias intersectoriales y el organismo internacional “The International Rehabilitation Council for Torture Victims”, en fecha 21-22 de junio de 2001 en Santiago de Chile.
15. Informe La Tortura Un Problema Médico, realizado por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas en marzo de



1983.

16. Informe La Tortura, Modelo de Intervención, realizado por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas en el año 2005.
17. Norma Técnica para la atención en salud de personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado en el periodo 1973-1990, de la subsecretaría de Salud Pública, división de Prevención y Control de Enfermedades, Departamento de Salud Mental. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
18. Artículo Represión política, daño transgeneracional y el rol del estado como agente reparador, columna de opinión del psicólogo clínico Sergio Beltrán P. del Programa de Reparación Integral en Salud, del Servicio de Salud Araucanía Norte, publicado en fecha 30 de junio de 2017.
19. Informe Transgeneracionalidad del Daño, realizado por el psicólogo Freddy Silva G. en su carácter de Coordinador de Equipo Especializado PRAIS del Servicio de Salud Aconcagua, en fecha 16 de octubre de 2017.
20. Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo III Contexto: Con este capítulo la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura aspira a describir un contexto básico para la mejor comprensión de la represión política verificada durante el régimen militar, considerando que ésta tuvo lugar, cobró impulso y pudo prolongarse debido a una serie de factores de índole social, política, institucional, jurídica y cultural. No es su intención ofrecer un cuadro completo o pormenorizado de la historia del régimen instalado por la Junta Militar de gobierno desde el 11 de septiembre de 1973. En concreto, este capítulo busca dar cuenta del contexto de la represión política, con particular referencia a la prisión política y la tortura.
21. Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (VALECH), comisión creada y publicada en el Diario Oficial bajo



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PBWFXLKJMXC

Decreto Supremo N° 1.040 el 11 de noviembre de 2003, con la finalidad de establecer de manera rigurosa una lista de personas que hayan sufrido privación de libertad y tortura por razones políticas, así como entre otros factores, sus métodos y sus procedimientos refinados con el tiempo.

22. Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo V: Métodos de Tortura Amenazas, págs. 270 a la 272, inclusive.
23. Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH) Capítulo V: Métodos de Tortura Aplicación de Electricidad, págs. 265 a la 270, inclusive.
24. Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo V: Métodos de Tortura Confinamiento en Condiciones Inhumanas, págs. 284 a la 285.
25. Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH) Capítulo V: Métodos de Tortura. Golpizas Reiteradas, págs. 256 a la 260, inclusive.
26. Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH) Capítulo V: Métodos de Tortura Humillaciones y Vejámenes, págs. 274 a la 276, inclusive.
27. Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo V: Métodos de Tortura. Lesiones Corporales Deliberadas, págs. 260 a la 262, inclusive.
28. Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH) Capítulo V: Métodos de Tortura Presenciar Fusilamiento de Otros Detenidos, pág. 283.
29. Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo V: Métodos de Tortura Presenciar Torturas de Otros, pág. 280 a la 282, inclusive.
30. Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura



- (VALECH). Capítulo V: Métodos de Tortura Privación o Interrupción del Sueño, págs. 286 a la 287, inclusive.
31. Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH) Capítulo V: Métodos de Tortura Privaciones Deliberadas de Medios de Vida, págs. 285 a la 286.
 32. Informe Social de daño del demandante don Gerardo Ariel Gallardo Cortéz suscrito por la profesional Trabajadora Social Ana María Castro Rosales.
 33. Informe Social de daño del demandante doña Doris Yannet Gallardo Mondaca suscrito por la profesional Trabajadora Social Ana María Castro Rosales.
 34. Informe Social de daño del demandante doña Laura Andrea Gallardo Soliz suscrito por la profesional Trabajadora Social Ana María Castro Rosales.
 35. Informe Social de daño del demandante doña Inés del Carmen Soliz Milanca suscrito por la profesional Trabajadora Social Ana María Castro Rosales.
 36. Certificado de título profesional de Trabajador Social de doña Ana María Castro Rosales emitido por la Universidad Católica de la Santísima Concepción, cédula nacional de identidad número 19.119.238-9, de fecha 02 de marzo 2021.
 37. Postítulo de Peritaje Social en Procesos Judiciales obtenido por doña Ana María Castro Rosales, dictado por el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de la Frontera, de fecha 09 de diciembre de 2021.
 38. Carpeta de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura Valech, correspondiente a don Gerardo Ariel Gallardo Cortez, RUN: 6134135-8.
 39. Portada principal de expediente, Comprobante de Ingreso de Ficha y Antecedentes ante el Instituto Nacional de Derechos



Humanos (INDH) Santiago, a nombre del demandante don Gerardo Ariel Gallardo Cortez de fecha 18 de marzo de 2004.

40. Ficha de Ingreso Preso Político y/o Torturado ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Santiago, a nombre del demandante don Gerardo Ariel Gallardo Cortez de fecha 18 de marzo de 2004.
41. Datos de la 1º, 2º, 3º y 4º Detención ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Santiago, que indica que el demandante don Gerardo Ariel Gallardo Cortez fue detenido por funcionarios de Carabineros y Militares el día 17 de septiembre de 1973, permaneciendo privado de libertad hasta el día 12 de octubre del mismo año.
42. Antecedentes de Tortura de la 1º, 2º, 3º y 4º Detención ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Santiago, que señala que don Gerardo fue golpeado, mojado, amarrado con alambres y desnudado, lo cual afectó su sistema nervioso, generándole mucho estrés y un profundo miedo a quemaduras y a la corriente eléctrica.
43. Datos de la 5º Detención ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Santiago, que indica que el demandante don Gerardo Ariel Gallardo Cortez fue detenido por funcionarios de Carabineros y Militares el día 19 de octubre de 1973, permaneciendo privado de libertad hasta el día 15 de noviembre de 1974.
44. Antecedentes de Tortura de la 5º Detención ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Santiago, que señala que don Gerardo fue golpeado, amarrado con alambres, víctima de aplicación de corriente eléctrica, interrogatorios y aislamiento. Las consecuencias de ello fueron que quedara con lesiones lumbares, quemaduras por la aplicación de corriente eléctrica, pánico, alteraciones el sistema nervioso y la expulsión de su liceo, lo que lo dejó privado de la posibilidad de continuar con sus estudios.



45. Cédula Nacional de Identidad ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Santiago, a nombre de don Gerardo Ariel Gallardo Cortez.
46. Relato aportado por don Gerardo Ariel Gallardo Cortez al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Santiago, en el que da cuenta de haber sido víctima de aplicación de corriente eléctrica, privado de alimentos, de asistencia al baño, obligado a permanecer sentado en el sueño, privado de sus estudios y víctima de constantes seguimientos y detenciones por parte de Carabineros.
47. Declaración suscrita por don Vitalicio Ochoa Villanueva, con fecha Febrero de 2004, en la localidad de Rio Bueno, a través de la cual don Vitalicio manifiesta conocer desde el año 1968 a don Gerardo Ariel Gallardo Cortez, quien fuera dirigente estudiantil del Liceo Rio Bueno y ex preso político en la Ciudad de Valdivia durante el año 1973.
48. Certificado suscrito por don Helmuth Valdovino Navarrete con fecha febrero de 2004 en la localidad de Rio Bueno, por el cual declara conocer a don Gerardo Ariel Gallardo Cortez, quien fue Preso Político, detenido el día 19 de octubre de 1973, llevado al campo de Prisioneros Políticos de la comuna de Valdivia.
49. Sentencia de fecha 15 de noviembre de 1974, dictada en causa N° 1357-73, sobreseimiento 162, por medio de la cual se decreta el sobreseimiento total y temporal de don Gerardo Ariel Gallardo Cortez y otros detenidos en autos ya individualizados.
50. Comprobante de Ingreso de Antecedentes ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura a nombre de don Gerardo Ariel Gallardo Cortez, de fecha 08 de marzo de 2004.
51. Carpeta de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura Valech, correspondiente a don Gerardo Ariel Gallardo Cortez, RUN: 6134135-8.
52. Portada principal de expediente, Comprobante de Ingreso de



Ficha y Antecedentes ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Santiago, a nombre del demandante don Gerardo Ariel Gallardo Cortez de fecha 18 de marzo de 2004.

53. Ficha de Ingreso Preso Político y/o Torturado ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Santiago, a nombre del demandante don Gerardo Ariel Gallardo Cortez de fecha 18 de marzo de 2004.

54. Datos de la 1º, 2º, 3º y 4º Detención ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Santiago, que indica que el demandante don Gerardo Ariel Gallardo Cortez fue detenido por funcionarios de Carabineros y Militares el día 17 de septiembre de 1973, permaneciendo privado de libertad hasta el día 12 de octubre del mismo año.

55. Antecedentes de Tortura de la 1º, 2º, 3º y 4º Detención ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Santiago, que señala que don Gerardo fue golpeado, mojado, amarrado con alambres y desnudado, lo cual afectó su sistema nervioso, generándole mucho estrés y un profundo miedo a quemaduras y a la corriente eléctrica.

56. Datos de la 5º Detención ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Santiago, que indica que el demandante don Gerardo Ariel Gallardo Cortez fue detenido por funcionarios de Carabineros y Militares el día 19 de octubre de 1973, permaneciendo privado de libertad hasta el día 15 de noviembre de 1974.

57. Antecedentes de Tortura de la 5º Detención ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Santiago, que señala que don Gerardo fue golpeado, amarrado con alambres, víctima de aplicación de corriente eléctrica, interrogatorios y aislamiento. Las consecuencias de ello fueron que quedara con lesiones lumbares, quemaduras por la aplicación de corriente eléctrica, pánico, alteraciones el sistema nervioso y la expulsión de su liceo, lo que lo



dejo privado de la posibilidad de continuar con sus estudios.

58. Cédula Nacional de Identidad ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Santiago, a nombre de don Gerardo Ariel Gallardo Cortez.
59. Relato aportado por don Gerardo Ariel Gallardo Cortez al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Santiago, en el que da cuenta de haber sido víctima de aplicación de corriente eléctrica, privado de alimentos, de asistencia al baño, obligado a permanecer sentado en el sueño, privado de sus estudios y víctima de constantes seguimientos y detenciones por parte de Carabineros.
60. Declaración suscrita por don Vitalicio Ochoa Villanueva, con fecha Febrero de 2004, en la localidad de Rio Bueno, a través de la cual don Vitalicio manifiesta conocer desde el año 1968 a don Gerardo Ariel Gallardo Cortez, quien fuera dirigente estudiantil del Liceo Rio Bueno y ex preso político en la Ciudad de Valdivia durante el año 1973.
61. Certificado suscrito por don Helmuth Valdovino Navarrete con fecha febrero de 2004 en la localidad de Rio Bueno, por el cual declara conocer a don Gerardo Ariel Gallardo Cortez, quien fue Preso Político, detenido el día 19 de octubre de 1973, llevado al campo de Prisioneros Políticos de la comuna de Valdivia.
62. Sentencia de fecha 15 de noviembre de 1974, dictada en causa N° 1357-73, sobreseimiento 162, por medio de la cual se decreta el sobreseimiento total y temporal de don Gerardo Ariel Gallardo Cortez y otros detenidos en autos ya individualizados.
63. Comprobante de Ingreso de Antecedentes ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura a nombre de don Gerardo Ariel Gallardo Cortez, de fecha 08 de marzo de 2004.
64. Normativa Técnica General del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud y Derechos Humanos, aprobada por el Ministerio de Salud para la atención de personas afectadas por la



represión política ejercida por el Estado de Chile entre los años 1973 a 1990.

65. Resolución Exenta N° 437, que aprueba la Norma Técnica General N° 88 del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud y Derechos Humanos para las personas afectadas por la represión política ejercida por el estado de Chile entre los años 1973 a 1990.

66. Informe Psicológico de Daño a consecuencia de detención política, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes del demandante doña Doris Yannet Gallardo Mondaca emitido por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud y Derechos Humanos (PRAIS) perteneciente al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, en febrero 2023, suscrito por el profesional Psicólogo Ignacio Fernández Rosas. El informe cuenta con una historización que da cuenta de la historia de represión vivida por el padre de doña Doris, así como también de los hitos más importantes en la vida de doña Doris. Sobre la evaluación se señala que es factible referir que doña Doris ha vivido diferentes daños psicológicos productos de la represión estatal extrema sufrida por su padre, destacando el impacto en su desarrollo infanto-adolescente, la afectación de su proyecto de vida y las complejidades actuales de ser la cuidadora de don Gerardo. Doña Doris crece con distanciamiento emocional del padre, debe renunciar a su deseo vocacional de ser carabinera, y en la actualidad es cuidadora principal de su padre, enfrentándose cotidianamente a las angustias y miedos traumáticos del padre.

67. Normativa Técnica General del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud y Derechos Humanos, aprobada por el Ministerio de Salud para la atención de personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado de Chile entre los años 1973 a 1990.

68. Resolución Exenta N° 437, que aprueba la Norma Técnica



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PBWFXLKJMXC

General N° 88 del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud y Derechos Humanos para las personas afectadas por la represión política ejercida por el estado de Chile entre los años 1973 a 1990.

69. Informe Psicológico de Daño a consecuencia de detención política, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes del demandante don Gerardo Ariel Gallardo Cortés emitido por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud y Derechos Humanos (PRAIS) perteneciente al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, en enero 2021, suscrito por los profesionales Psicólogo Javier Castro Alfaro y Médico Internista Pamela Jeria Ortiz. En su contenido el informe da cuenta de la historia de represión, en la cual se destaca que don Gerardo con solo 17 años es detenido, sometido a torturas, cómo golpizas, aplicación de electricidad, privación de medios básicos de vida. Don Gerardo cuenta con diversos diagnósticos como, Diabetes mellitus tipo 2 con complicaciones, Pie diabético, Úlcera plantar izquierda, Amputación de 1° y 2° ortijos izquierdos, Amputación infracondílea. Por último se concluye que, acorde a la sintomatología presente en don Gallardo, es posible considerar un psico-diagnóstico de Trastorno de Estrés Postraumático de carácter Crónico, finalmente se considera que don Gerardo sufre de consecuencias psicológicas, sociales y económicas asociadas al daño causado por la experiencia extrema del Terrorismo de Estado, las cuales producen en ella sus efectos hasta la actualidad.
70. Informe Sicológico de Daño e Intensidad de Daño Actual con Firma Electrónica Avanzada a nombre del demandante don Gerardo Ariel Gallardo Cortés, confeccionado entre los días 28-29 de septiembre y 25-26 de octubre de 2023 en base a entrevistas realizadas al actor por el Psicólogo Clínico del Sanatorio Alemán don Cristian Alberto Dupouy Cortés, concluyendo el profesional con que en la actualidad el demandante está atravesando por síntomas asociados a un Episodio depresivo grave sin síntomas



psicóticos, (CIE 10 F32.2) asociado a la vulneración de sus derechos fundamentales entre los meses de Septiembre de 1973 a Noviembre de 1974, donde fue violentado física y psicológicamente, por Agentes del Estado, con indicadores de sintomatología de ansiedad, anhedonia, labilidad emocional, irritabilidad, fatiga, pesadillas, insomnio, falta de concentración, baja autoestima, pesimismo, sentimiento de culpa, angustia y escasa autoconfianza.

71. Informe Sicológico de Daño e Intensidad de Daño Actual con Firma Electrónica Avanzada a nombre de la demandante doña Inés del Carmen Soliz Milanca, confeccionado entre los días 28-29 de septiembre y 25-26 de octubre de 2023 en base a entrevistas realizadas al actor por el Psicólogo Clínico del Sanatorio Alemán don Cristian Alberto Dupouy Cortés, concluyendo el profesional con que en la actualidad la demandante está atravesando por síntomas asociados a un Trastorno Distímico (Distimia) (CIE 10 F34.1) asociado a la detención y tortura sufrida por su marido, don Gerardo Gallardo Cortés desde Septiembre de 1973 hasta Noviembre de 1974, generando un daño irreparable hasta el día de hoy, con indicadores de sintomatología de irritabilidad, crisis de pánico, insomnio, pesadillas, angustia labilidad emocional, anhedonia, sentimiento de culpa, falta de concentración, fatiga y escasa autoconfianza.

72. Informe Sicológico de Daño e Intensidad de Daño Actual con Firma Electrónica Avanzada a nombre de la demandante doña Laura Andrea Gallardo Soliz, confeccionado entre los días 28-29 de septiembre y 25-26 de octubre de 2023 en base a entrevistas realizadas al actor por el Psicólogo Clínico del Sanatorio Alemán don Cristian Alberto Dupouy Cortés, concluyendo el profesional con que en la actualidad la demandante está atravesando por síntomas asociados a un Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave, sin síntomas psicóticos (CIE 10 F33.2) asociado a la detención y tortura sufrida por su padre, durante los meses de



septiembre de 1973 hasta noviembre de 1974 generando un daño irreparable hasta el día de hoy, con indicadores de sintomatología de crisis de angustia, anhedonia, pesadillas, falta de concentración, irritabilidad, pesimismo, Ansiedad, baja autoestima, insomnio, labilidad emocional, fatiga, sentimiento de culpa y escasa autoconfianza.

73. Informe Sicológico de Daño e Intensidad de Daño Actual con Firma Electrónica Avanzada a nombre de la demandante doña Doris Yannet Gallardo Mondaca, confeccionado entre los días 28-29 de septiembre y 25-26 de octubre de 2023 en base a entrevistas realizadas al actor por el Psicólogo Clínico del Sanatorio Alemán don Cristian Alberto Dupouy Cortés, concluyendo el profesional con que en la actualidad la demandante está atravesando por síntomas asociados a un Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave, sin síntomas psicóticos (CIE 10 F33.2) debido a la vulneración de derechos fundamentales que sufrió su padre durante septiembre de 1973 hasta Noviembre de 1974, donde fue detenido y torturado su progenitor, generando graves consecuencias físicas y psicológicas que repercutieron al interior de su hogar afectándolos a ellos sus hijos y a su madre, con indicadores de sintomatología de anhedonia, pesimismo, falta de concentración, fatiga, labilidad emocional, pesadillas, sentimiento de culpa, baja autoestima, insomnio, angustia, irritabilidad y escasa autoconfianza.

SÉPTIMO: Por su parte, la demandada rindió prueba documental consistente en el ORD, DEGST N° 4792-6034 del IPS, el cual informa que los beneficios de reparación entregados a GERARDO GALLARDO CORTEZ al alcanzan a la suma total de \$33.219.962 al mes de Marzo de 2022.

En cuando a las señoras Inés del Carmen Soliz Milanca, Run N°9.649.023-2, Doris Yanett Gallardo Moncada Run N° 17.850.346-4 y Laura Andrea Gallardo Soliz Run N° 13.820.645-9, no han recibido beneficios de reparación en este Instituto, toda vez que son madre e hijas



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PBWFXLKJMXC

respectivamente, del señor Gallardo Cortéz, parentescos que no tienen beneficios asignados en las Leyes N°s 19.992 y 20.874 (Valech).

OCTAVO: Que, la prueba documental rendida, en especial, el informe practicado el psicólogo Clínico del Sanatorio Alemán de Concepción don Cristian Alberto Dupouy Cortés, arriba al siguiente diagnóstico y conclusiones:

Gerardo Ariel Gallardo Cortés:

“Es posible concluir que el Sr. Gerardo Ariel Gallardo Cortés, en la actualidad está atravesando por síntomas asociados a un Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos, (CIE 10 F32.2) asociado a la vulneración de sus derechos fundamentales entre los meses de Septiembre de 1973 a Noviembre de 1974, donde fue violentado física y psicológicamente, por Agentes del Estado

Los indicadores de sintomatología son los siguientes: Ansiedad, anhedonia, labilidad emocional, irritabilidad, fatiga, pesadillas, insomnio, falta de concentración, baja autoestima, pesimismo, sentimiento de culpa, angustia, escasa autoconfianza.”

NOVENO: Así, por otra parte, con el análisis de los medios de prueba valorados en los fundamentos anteriores permiten dar por acreditada la existencia y entidad del daño moral.

En consecuencia, se le otorgará prudencialmente al demandante Gerardo Ariel Gallardo Cortéz, la suma de cuarenta millones de pesos.

EN CUANTO A LA DEMANDA DE INÉS DEL CARMEN SOLIZ MILANCA, DORIS YANETT GALLARDO MONCADA Y LAURA ANDREA GALLARDO SOLIZ

DECIMO: Que en cuanto a la acción de las demandantes Inés del Carmen Soliz Milanca, Doris Yanett Gallardo Moncada y Laura Andrea Gallardo Soliz, no consta en autos el haberse acreditado la *calidad de víctimas* de delitos de lesa humanidad, pues no aparece acompañado ningún antecedente de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura que así lo señale. Pues bien, por esta sólo circunstancia permite tener por desestimada su demanda.

Que, por otra parte, el certificado de matrimonio da cuenta de que doña Inés del Carmen Soliz Milanca contrajo matrimonio con el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PBWFXLKJMXC

demandante Gerardo Ariel Gallardo Cortez, recién el 4 de marzo de 1983; el certificado nacimiento de Doris Yanett Gallardo Moncada, señala como su fecha de nacimiento el 3 de mayo de 1991 y el certificado de nacimiento de Laura Andrea Gallardo Soliz señala como fecha de su nacimiento el 24 de septiembre de 1980, todos estos antecedentes dan cuenta de que los vínculos familiares de las demandantes señaladas con don Gerardo Ariel Gallardo Cortez se produjeron con posterioridad a los hechos denunciados por éste (1973 y 1974), lo que resulta ser insuficiente para que la acción prospere, pues se encuentran desconectados temporalmente de las actuaciones de los agentes del Estado provocaron al demandante Gerardo Ariel Gallardo Cortez en forma directa; esto es, hace más de 10 años de ocurridos los hechos respecto de la cónyuge, y más de 13 y 20 años, aproximadamente, respecto de los hijos. Tampoco se trata de daño extra-patrimonial por rebote o repercusión, dado que la víctima de derechos humanos se encuentra viva y ha demandado para sí los perjuicios que reclama, como legitimado activo de la acción indemnizatoria del daño moral reclamado.

UNDÉCIMO: La circunstancia descrita en el párrafo precedente, da cuenta de que no concurren los presupuestos de la responsabilidad extracontractual, puesto que no se ha acreditado algún accionar por parte de los agentes del Estado en contra de las demandantes que les haya producido algún daño, menos aún, que este haya sido directo, pues el demandante resulta ser parte de la presente demanda y no se encuentra fallecido, única circunstancia que habilitaría a las demandantes para accionar de perjuicios.

Tampoco cabe dar por establecida una necesaria relación de causalidad entre los perjuicios sufridos por la víctima de los derechos humanos producidos, como se dijo, en los años 1973-1974, y los otros demandantes. Además, la indemnización no puede llegar a constituir un enriquecimiento injusto. Y, en cualquier caso, los perjuicios morales no se encuentran suficientemente acreditados, por las mismas reflexiones a que se ha hecho referencia con antelación, más lo que se dirá a continuación.

DUODÉCIMO: El apoderado de la parte demandante, respecto de estos otros actores, a fin de acreditar la existencia y entidad del daño moral



de las personas, no víctimas directas, acompañó “cuatro informes psicológicos” al folio 73, y que el tribunal tuvo por acompañados, con citación, al folio 75.

Pues bien, dichos documentos constituyen simples *documentos privados*, meras copias, *que emanan de terceros*, y en dicho carácter *carecen de todo valor probatorio* por cuanto no han sido reconocidos en juicio por sus otorgantes, a la vista de lo que prescribe el numeral 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, y, por consiguiente, no pueden ser tenidos por reconocidos. Tampoco se ha acreditado, en modo alguno, por otros medios, su autenticidad, integridad y veracidad.

En cualquier caso, y al margen de su valor probatorio, dichos informes dan cuenta que la demandante doña Inéz Solís se divorció de la víctima de derechos humanos, don Gerardo Gallardo; ambos presentan como estado civil el de “divorciados”, aspecto que se *omitió* en la demanda.

Por los fundamentos expuestos, la acción de perjuicios de estos demandantes será rechazada por no haberse acreditado los fundamentos de la acción.

DÉCIMO TERCERO: Que, no se emitirá pronunciamiento respecto de las excepciones de prescripción y falta de legitimación activa de las demandadas opuestos por la demanda, atendido el mérito de lo resuelto prece3dentemente.

DÉCIMO CUARTO: Que la demás prueba rendida, no analizada de manera circunstanciada, en nada altera las conclusiones a que se ha arribado con precedencia.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en los artículos 5°, 6° y 38 de la Constitución Política de la República; los artículos 1.1., y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 1698 del Código Civil, 144, 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

A.- Respecto del demandante Gerardo Ariel Gallardo Cortez.

I.- Que **SE RECHAZAN** las excepciones perentorias de reparación y de prescripción extintiva de la acción opuesta por la demandada.

II.- Que **SE ACOGE PARCIALMENTE** la demanda civil de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral interpuesta al folio



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PBWFXLKJMXC

1 por **Gerardo Ariel Gallardo Cortés**, en contra del **Fisco de Chile**, representado por el abogado procurador fiscal don Natalio Vodanovic Schnake, y, en consecuencia, se condena al **Fisco de Chile** a pagar la suma de \$40.000.000.-

III.- Las cantidades ordenadas pagar a cada uno de ellos se reajustarán conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde que la presente sentencia quede ejecutoriada y devengará intereses desde que el deudor se constituya en mora en el pago de la suma fijada en la sentencia.

IV.- No se condena en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida.

B.- Respecto de las demandantes Inés Del Carmen Soliz Milanca, Doris Yanett Gallardo Moncada y Laura Andrea Gallardo Soliz

V.- Que, **SE RECHAZA** la demanda civil de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral interpuesta al folio 1 por **Inés del Carmen Soliz Milanca, Doris Yanett Gallardo Moncada y Laura Andrea Gallardo Soliz** en contra del **Fisco de Chile**, representado por el abogado procurador fiscal don Natalio Vodanovic Schnake, por no haberse acreditado los fundamentos de la acción.

VI.- Que, **OMITE PRONUNCIAMIENTO** respecto de las excepciones de prescripción y de falta de legitimación activa formulada por las demandadas, con el mérito de lo resuelto recedentemente.

VII.- No se condena en costas a las demandantes por carecer de motivo plausible para litigar

Regístrese, notifíquese por cédula y consúltese si no se apelare.

Rol C-2.145-2021.-

Redacción de don EDINSON LARA AGUAYO, Juez Titular; autoriza doña Cecilia Matamala Kroell, Secretaria Subrogante.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil, se incluyó en el estado diario la sentencia precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PBWFXLKJMXC

Valdivia, a diez de Enero del año dos mil veinticuatro.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PBWFXLKJMXC